

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD

ACTOR:

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA, CON REGISTRO ANTE EL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

AUTORIDADES RESPONSABLES:

- a) PLENO DE LA LXVI LEGISLATURA DEL H.
CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.
- b) GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE.

MINISTRAS Y MINISTROS DE LA H. SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
PRESENTE.

Quien suscribe, JOSÉ DE JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA, Presidente de la Dirección Nacional Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática, cuyo registro y personalidad con que me ostento, la acredito en términos de las certificaciones expedidas por el C. Licenciado EDMUNDO JACOBO MOLINA, Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, de fecha; señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas, así como notificaciones y documentos, en las oficina que ocupa la Representación del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, ubicadas en Viaducto Tlalpan, número 100, edificio "A", Planta Baja, Colonia Arenal Tepepan, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, Código Postal 14610; y para que indistintamente formulen promociones, concurren a las audiencias y en ellas rinda pruebas, presenten alegatos y promuevan incidentes designo como delegados a los CC. [REDACTED]

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN

2022 SEP 10 PM 3:34

OFICINA DE
CERTIFICACIÓN JUDICIAL
Y CORRESPONDENCIA

[REDACTED]

[REDACTED] de forma conjunta o separada, ante Ustedes, con el debido respeto comparecemos y exponemos lo siguiente:

Que por medio del presente ocurso y con fundamento en el artículo 105, fracción II, inciso f) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 59, 60, 62 tercer párrafo de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; venimos en representación del Partido de la Revolución Democrática, Partido Político Nacional, en tiempo y forma a promover la ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD, en contra de normas que consideramos inconstitucionales y por consiguiente inválidas, emanadas de la LXVI Legislatura del H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la autoridad que en párrafos posteriores se precisan, pidiendo la intervención del Pleno de esa Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, como único interprete de la Constitución General de la República, en relación a la expedición, promulgación y publicación del "Decreto número 240, por el que se adiciona la fracción III al artículo 11 de la Constitución Política del Estado de Veracruz" y publicado en la Gaceta Oficial del Estado, en el Número Extraordinario 318, Tomo CCV, de fecha jueves once de agosto de dos mil veintidós, en los términos que a continuación se expresan; por lo que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley Reglamentaria en cita, manifestamos los siguientes:

I. NOMBRE DEL ACTOR: C. JOSÉ DE JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA, Presidente de la Dirección Nacional Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática, cuyo registro y personalidad con que me ostento, la acredito en términos de las certificaciones expedidas por el C. Licenciado EDMUNDO JACOBO MOLINA, Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral.

II. ÓRGANO LEGISLATIVOS Y EJECUTIVO QUE INTERVINIERON EN LA EMISIÓN Y PROMULGACIÓN DE LAS NORMAS CONSTITUCIONALES IMPUGNADAS:

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en los diversos, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos".

a) ÓRGANO LEGISLATIVO Y AUTORIDAD EMISORA: La LXVI Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con domicilio en la Avenida Encanto sin número esquina con Avenida Lázaro Cárdenas, Colonia El Mirador, Código Postal 91170, en la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz, como Autoridad que emite el "Decreto número 240, por el que se adiciona la fracción III al artículo 11 de la Constitución Política del Estado de Veracruz", mismo que es publicado en la Gaceta Oficial del Estado, en el Número Extraordinario 318, Tomo CCV, de fecha jueves once de agosto de dos mil veintidós.

b) ÓRGANO EJECUTIVO Y AUTORIDAD PROMULGADORA: Lo es el C. CUITLÁHUAC GARCÍA JIMÉNEZ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, con domicilio en la calle Enríquez esquina con Leandro Valle, zona Centro, Código Postal 91000, en la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz, cuya atribución es la promulgar y mandar a publicar las leyes o decretos que apruebe el Congreso del Estado, y como es el caso, promulga el "Decreto número 240, por el que se adiciona la fracción III al artículo 11 de la Constitución Política del Estado de Veracruz", aprobado por la LXVI Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

III. NORMA GENERAL CUYA INVALIDEZ SE RECLAMA Y EL MEDIO OFICIAL EN QUE SE HUBIERE PUBLICADO: "Decreto número 240, por el que se adiciona la fracción III al artículo 11 de la Constitución Política del Estado de Veracruz", mismo que es publicado en la Gaceta Oficial del Estado, en el Número Extraordinario 318, Tomo CCV, de fecha jueves once de agosto de dos mil veintidós, aprobado por la LXVI Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

IV. PRECEPTOS CONSTITUCIONALES QUE SE ESTIMAN VIOLADOS: Lo son los artículos: 1o, 13, 16 párrafo primero, 30 inciso A), 35 fracción II, 36 fracción IV, 39, 40, 41 párrafo tercero fracción I, 82 fracciones I y III, 116 fracción I párrafo quinto y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo, los artículos: 1, 2, 4 párrafos décimo y décimo primero, 6 párrafo primero, 11, 14 párrafo primero, 15 fracción I, 16 fracción III, 43 fracciones I y II, 80 y 84, de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demás relativos y aplicable en el caso.

Lo anterior se sustenta en los siguientes:

ANTECEDENTES

1. El veintiocho de julio de dos mil veintidós, se presentó la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción III al artículo 11 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
2. El treinta y uno de julio de dos mil veintidós, el Presidente de la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales turnó a la Secretaría General de la LXVI Legislatura del H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el Dictamen con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción III al artículo 11 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para someterlo a la consideración del Pleno.
3. El dos de agosto de dos mil veintidós, durante la Primera Sesión, del Segundo Receso, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Diputación Permanente del H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se aprobó la convocatoria al "Cuarto Periodo de Sesiones Extraordinarias correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXVI Legislatura del H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave".
4. El mismo dos de agosto de dos mil veintidós, se llevó a cabo el Cuarto Periodo de Sesiones Extraordinarias, con único punto a tratar el Dictamen con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción III al artículo 11 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
5. El once de agosto de dos mil veintidós, en la Segunda Sesión, del Segundo Receso, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Diputación Permanente del H. Congreso del

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se dio el Informe de la Secretaría General del H. Congreso del Estado, respecto de la votación emitida por los Ayuntamientos de la entidad sobre el Decreto por el que se adiciona la fracción III al artículo 11 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a través del cual se dio a conocer que son ciento dieciséis Ayuntamientos que remitieron al Congreso del Estado sus Actas de Sesión de Cabildo a través del cual se aprobó el Decreto correspondiente.

6. El mismo once de agosto de dos mil veintidós, se publicó en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, bajo el Número Extraordinario 318, Tomo CCV, el "DECRETO NÚMERO 240 POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 11 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ".

Por lo anteriormente expuesto y en atención a la procedibilidad de la presente Acción de Inconstitucionalidad, nos permitimos respetuosamente, describir:

PROCEDENCIA DE LA ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD

En la presente demanda se aducen violaciones a los requisitos para "ser veracruzano" establecidos en la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con el único propósito de beneficiar a una persona en particular y con ello, que cumpla con el supuesto establecido en el artículo 43 fracción I que habla de los requisitos para ser "Gobernador del Estado", lo que nos ubica dentro de los supuestos del artículo 105 fracción II inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para el ejercicio de la Acción de Inconstitucionalidad. También resulta aplicable la tesis P./J.25/99, la cual establece que la materia electoral puede encontrarse en legislación ajena a la que regula los Procesos Electorales; esto se reitera con las tesis, en las que se permite la judiciabilidad de una Constitución local. A saber:

"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. MATERIA ELECTORAL PARA LOS EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO. En la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, se instituyó este tipo de vía constitucional en el artículo 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero se prohibió su procedencia en contra de leyes en materia electoral; con la reforma a dicho precepto fundamental publicada en el mismo medio de difusión el veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, se admitió la procedencia de la acción en contra de este tipo de leyes. Con motivo de esta última reforma, la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de dicha Constitución prevé reglas genéricas para la sustanciación del procedimiento de la acción de inconstitucionalidad y reglas específicas cuando se impugnan leyes electorales. De una interpretación armónica y sistemática, así como teleológica de los artículos 105, fracción II, y 116, fracción IV, en relación con el 35, fracciones I y II, 36, fracciones III, IV y V, 41, 51, 56, 60, 81, 115, fracciones I y II, y 122, tercer párrafo, e inciso c), base primera, fracciones I y V, inciso f), todos de la propia Constitución, se llega al convencimiento de que las normas generales electorales no sólo son las que establecen el régimen normativo de los procesos electorales propiamente dichos, sino también las que, aunque contenidas en ordenamientos distintos a una ley o código electoral sustantivo, regulan aspectos vinculados directa o indirectamente con dichos procesos o que deban influir en ellos de una manera o de otra, como por ejemplo, distritación o redistribución, creación de órganos administrativos para fines electorales, organización de las elecciones, financiamiento público, comunicación social de los partidos, límites de las erogaciones y montos máximos de aportaciones, delitos y faltas administrativas y sus sanciones. Por lo tanto esas normas pueden impugnarse a través de la acción de inconstitucionalidad y, por regla general, debe instruirse el procedimiento correspondiente y resolverse conforme a las disposiciones específicas que para tales asuntos prevé la ley reglamentaria de la materia, pues al no existir disposición expresa o antecedente constitucional o legal alguno que permita diferenciarlas por razón de su contenido o de la materia específica que regulan, no se justificaría la aplicación de las reglas genéricas para unas y las específicas para otras."

"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 80, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO, QUE ESTABLECE REQUISITOS PARA OCUPAR EL CARGO DE GOBERNADOR DEL ESTADO, CONSTITUYE UNA LEY ELECTORAL PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE ESE MEDIO DE CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al pronunciarse respecto de las características de las normas de naturaleza electoral que pueden impugnarse a través de la acción de inconstitucionalidad, sostuvo que no son sólo las contenidas en leyes o códigos electorales sustantivos, sino también las vinculadas directa o indirectamente con los procesos electorales. En ese sentido, se concluye que el artículo 80, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, que establece requisitos de elegibilidad para ocupar el cargo de Gobernador del Estado, es de naturaleza electoral, en

tanto modula el ejercicio del derecho político-electoral a ser votado, si se toma en cuenta que, en términos de la Ley Electoral de Quintana Roo, no podrá registrarse a una persona como candidato al referido cargo si no cumple con todos los requisitos del precepto indicado, situación que no puede ubicarse al margen del ámbito electoral y de los procesos electorales, para efecto de la procedencia de la acción de inconstitucionalidad, máxime que el registro de un candidato constituye, por sí mismo, un acto inmerso en los procesos electorales, siendo la autoridad electoral la encargada de negarlo u otorgarlo.

Lo anterior se refuerza con el hecho de que los Partidos Políticos, por virtud del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somos entidades de interés público que tenemos como garantía institucional el promover la participación en la vida democrática e integrar la representación política. Sin embargo, también tenemos como deber el respetar la equidad de la contienda. Esto significa que también es nuestro deber impugnar los cambios legislativos que consideramos son perjudiciales en materia electoral y por ello, consideramos procedente la presente Acción de Inconstitucionalidad.

Es pertinente señalar que existe una brecha en el control Constitucional en materia política derivado de las jurisprudencias 34/2013 y 44/2014 del H. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la lectura estricta de la jurisprudencia P./J.25/99 por parte del pleno de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación. De ellas podemos ver que las jurisprudencias interpretan de forma estricta la materia político-electoral y de forma amplia la parlamentaria; sin embargo, existe otro aspecto que no se contempla cuando la materia político-electoral se vislumbra de forma exclusiva desde la óptica del H. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; una brecha al control Constitucional de derechos políticos en un sentido amplio, que surge cuando la Suprema Corte de Justicia también interpreta de forma estricta los alcances de la materia electoral y los alcances de los derechos políticos.

Han existido intentos de hacer uso de la Acción de Inconstitucionalidad en materia Electoral para defender los derechos políticos de forma amplia; al efecto, se ejercieron la 10/2018 en contra de la Ley de Seguridad Interior, la 97/2018 contra la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, la 114/2018 contra la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la 92/2019 contra

reformas al Código Penal del Estado de Tabasco, conocidas como la "Ley Garrote". En estas se buscó proteger la libertad de expresión en materia política, el ejercicio de la función pública en condiciones de igualdad, la libertad de asociación política, entre otros derechos.

En todas ellas, operó el sobreseimiento por ser la impugnación notoriamente improcedente; esto, a partir de una interpretación de la jurisprudencia P./J.25/99 "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. MATERIA ELECTORAL PARA LOS EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO", antes transcrita, sobre lo que debe ser la materia electoral en una Acción de Inconstitucionalidad.

En los oficios 703/2018 y 8155/2018 que desecharon las Acciones de inconstitucionalidad 10/2018 y 114/2018 respectivamente, se usó la tesis citada anteriormente de forma restrictiva al establecer que la lista de temas que enuncia como materia electoral ampliada es limitativa. Entonces, la: "...distribución o redistribución, creación de órganos administrativos para fines electorales, organización de las elecciones, financiamiento público, comunicación social de los partidos, límites de las erogaciones y montos máximos de aportaciones, delitos y faltas administrativas y sus sanciones...", es lo único que pudiera impugnarse a través de una Acción de Inconstitucional. Sin embargo, la lista de esa misma tesis podía tomarse como una mera enunciación de ejemplos en un intento de ampliar lo más posible la protección de derechos políticos-electorales.

Por ejemplo, en el Recurso de Reclamación con la clave de identificación: 12/2018-CA, de la Acción de Inconstitucionalidad 10/2018, se adujo que existía una conexión indirecta y que el razonamiento del desechamiento estaba indebidamente fundado y motivado; el razonamiento fue el siguiente:

"[...]"

28. A juicio de esta Sala, asiste la razón al recurrente.

29. En efecto, el Tribunal Pleno ha emitido una serie de criterios interpretativos, en los que ha venido suministrando pautas para determinar cuándo una norma pertenece a la materia electoral, para

efectos de justificar la procedencia de la acción, entre los que destacan los siguientes:

a. Son electorales las normas que inciden directamente en el proceso electoral correspondiente e impactan en los derechos electorales de los ciudadanos de votar y ser votados.

b. Son electorales no sólo las normas generales que establecen el régimen normativo de los procesos electorales propiamente dichos, sino también las que, aunque contenidas en ordenamientos distintos a una ley o código electoral sustantivo, regulan aspectos vinculados directa o indirectamente con dichos procesos, o que deban influir en ellos de una manera o de otra, como, por ejemplo: distritación o redistribución, creación de órganos administrativos para fines electorales, organización de las elecciones, financiamiento público, comunicación social de los partidos, límites de las erogaciones y montos máximos de aportaciones, delitos y faltas administrativas y sus sanciones.

c. Son electorales las normas relacionadas con el acceso de los partidos políticos y coaliciones a los tiempos en radio y televisión, pues indudablemente se refieren a una cuestión directamente vinculada con los procesos electorales, ya que los tiempos son una prerrogativa de los partidos políticos, constituida como un medio básico para la difusión de sus plataformas, así como para dar a conocer a los candidatos en las campañas y precampañas electorales, que inciden directamente en el proceso electoral.

d. Son normas electorales las que modulan el ejercicio del derecho político-electoral a ser votado, como las que establecen requisitos de elegibilidad a un cargo público.

30. De los criterios reseñados, debe destacarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido reiteradamente, que son normas electorales, entre otras, las que inciden directa o indirectamente en el proceso electoral, y las que impactan en el derecho al voto, activo o pasivo.

31. En el caso, el artículo 8 de la Ley de Seguridad Interior impugnado, en lo que interesa, establece que las movilizaciones que tengan un motivo político-electoral, que se realicen de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como Amenazas a la Seguridad Interior, ni podrán ser materia de Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior.

32. A primera vista, esta norma podría tener incidencia, directa o indirectamente, en los procesos electorales, pues, aparentemente, afecta al ejercicio de la comunicación política con fines político-electorales, a través de movilizaciones y manifestaciones públicas, así como al derecho de reunión con esos objetivos.

33. Asimismo, esa norma podría, en principio, incidir en el derecho a votar y ser votado, pues, la posibilidad de realizar movilizaciones públicas, con fines político-electorales, está relacionada con la capacidad de obtener y transmitir información político electoral necesaria para ejercer esos derechos.

34. Es importante enfatizar el carácter prima facie de esas afirmaciones, pues, determinar si las normas impugnadas inciden o no de manera significativa, en los procesos electorales y en los derechos políticos de los ciudadanos, consideradas todas las cosas, es un juicio que requiere de consideraciones interpretativas que deben tomarse en el momento deliberativo adecuado, como lo es el dictado de la sentencia por la Suprema Corte, ya que requieren de un análisis detenido y minucioso de esas normas y su relación con los procesos electorales y los derechos políticos.

[...]"

Tomado como conjunto, el contenido de las jurisprudencias 34/2013 y 44/2014 y la interpretación restringida de la jurisprudencia P./J.25/99, inhiben diversos tipos de control Constitucional sobre actos y leyes que inciden de forma indirecta sobre la materia electoral al afectar los derechos políticos amplísimos que subyacen a la misma. Tomando en cuenta que el Decreto 240 tiene como propósito fundamental hacer un traje a la medida para que una persona no originaria ni vecina del Estado [originaria de Zacatecas], pero con un hijo nacido en Veracruz, pueda alcanzar el estatus de "veracruzana" y con ello burlar a la norma Constitucional de la entidad y registrarla como candidata a la Gubernatura del Estado en el próximo proceso electoral local a efectuarse en el dos mil veinticuatro; para así, violar el espíritu de la norma y, por lo tanto, hacer una disfunción Constitucional de dicho poder constituido.

Esto tiene un sustento Constitucional en el artículo 17 de nuestra Ley Suprema, el cual dispone que toda persona tendrá derecho a que: "...se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial...". Por el lado convencional, el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos dispone como garantías judiciales, el que toda persona tenga: "...derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley...", para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

En el mismo sentido, dicha Convención en su artículo 25, contempla el derecho de protección judicial, conforme al cual: "...toda persona tiene derecho

a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la propia Convención...". La garantía del recurso judicial efectivo trasciende a la defensa de los derechos políticos, cosa que quedó demostrada en el Caso: CASTAÑEDA GUTMAN vs MÉXICO, en donde la Corte Interamericana de los Derechos Humanos destacó que los Estados se encuentran obligados a proveer recursos efectivos. A saber:

"78. El artículo 25.1 de la Convención establece, en términos generales, la obligación de los Estados de garantizar un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales. Al interpretar el texto del artículo 25 de la Convención, la Corte ha sostenido que la obligación del Estado de proporcionar un recurso judicial no se reduce simplemente a la mera existencia de los tribunales o procedimientos formales o aún a la posibilidad de recurrir a los tribunales, sino que los recursos deben tener efectividad, es decir, debe brindarse a la persona la posibilidad real de interponer un recurso, en los términos de aquel precepto. La existencia de esta garantía "constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática en el sentido de la Convención". Asimismo, conforme al artículo 25.2.b de la Convención, los Estados se comprometen a desarrollar las posibilidades del recurso judicial."

En el caso que nos ocupa, la improcedencia de esta demanda y la brecha Constitucional enmarcada por las jurisprudencias 34/2013, 44/2014 y la P./J.25/99 contraviene los dispositivos normativos antes citados y la interpretación que de los mismos realiza la Sentencia en comentario. Permitir la procedencia reconocerá evitar que dicha grieta de control Constitucional se amplíe y visitar las jurisprudencias electorales comentadas, pudiera disminuirla de tamaño. Estos son temas de urgente reflexión.

Por ello, no es obstáculo para esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación conocer de la cuestión que se plantea, el que no exista un supuesto específico en la normativa electoral, ya que es precisamente esa razón la que torna necesaria la intervención de ese Máximo Órgano Jurisdiccional, para efecto de que no permita la vulneración a lo dispuesto textualmente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tampoco, que se vulnere el derecho a una tutela judicial efectiva, atendiendo los criterios internacionales emitidos en tal sentido.

Efectivamente, resulta procedente la presente Acción de Inconstitucionalidad, pues al tratarse de un asunto parlamentario con implicaciones eminentemente Constitucionales y electorales, que en apariencia no encuentra un supuesto de procedencia específico en el Sistema Jurídico interno, resulta imprescindible que esa Suprema Corte de Justicia de la Nación garantice la existencia de un recurso judicial efectivo que permita su impugnación, tal como ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Por otra parte, es importante destacar, que aún y cuando la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, prevé un recurso local para combatir la inconstitucionalidad de las leyes que emanen del Órgano Legislativo local, a la fecha no existe Ley Reglamentaria que determine el procedimiento para sustanciar la Acción de Inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado; por lo que, al no existir la Ley Reglamentaria de estos mecanismos de Control Constitucional locales, no es necesario agotar este recurso. Lo anterior sin considerar el criterio contenido en la siguiente tesis de jurisprudencia:

"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD ESTABLECIDA EN LOS ARTÍCULOS 64, FRACCIÓN III, Y 65, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE. NO DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA ACCIÓN QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. De lo dispuesto en los artículos 64, fracción III, y 65, fracción II, de la Constitución Política del Estado de Veracruz-Llave, se advierte que compete a la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado sustanciar los procedimientos en las acciones de inconstitucionalidad que se presenten en contra de leyes o Decretos contrarios a la Constitución Local, ejercitados por el Gobernador del Estado o cuando menos por la tercera parte de los miembros del Congreso Estatal, así como formular los proyectos de resolución definitiva que someterá al Pleno del citado Tribunal. Sin embargo, si se toma en consideración que para que los sujetos legitimados para promover la acción de inconstitucionalidad establecida en el artículo 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentren obligados a agotar, previamente a esta vía constitucional, algún medio de defensa previsto en las leyes secundarias para la solución del conflicto, es presupuesto indispensable que la resolución que en él llegue a dictarse sea susceptible de impugnarse a través de dicho medio de control constitucional, resulta evidente que el citado medio de defensa contemplado en la Constitución Local no puede constituir una vía que deba agotarse previamente a la acción de inconstitucionalidad que establece la Constitución Federal, pues

en ésta únicamente puede plantearse la no conformidad de normas de carácter general con la propia Ley Fundamental, pero no así de actos, como lo sería la resolución que llegara a dictar el mencionado Tribunal Superior de Justicia al resolver la acción local.

Por todo lo anterior, y por ser los Partidos Políticos los entes jurídicos idóneos para deducir las acciones colectivas descritas en la "Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", además, porque tal actividad encaja perfectamente dentro de sus fines Constitucionales, tales como promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, por lo que se deben observar invariablemente los principios de Constitucionalidad y legalidad, y al conferirse la legitimación para hacer valer las Acciones de Inconstitucionalidad; es por ello que presentamos la presente Acción de Inconstitucionalidad, razón por la que nos permitimos transcribir el criterio contenido en la siguiente tesis de jurisprudencia:

"PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES. PUEDEN DEDUCIR ACCIONES COLECTIVAS DE INTERESES DIFUSOS CONTRA LOS ACTOS DE PREPARACIÓN DE LAS ELECCIONES. La interpretación sistemática de las disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en relación con el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y especialmente los principios rectores en la materia electoral federal consignados medularmente en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hacen patente que los partidos políticos nacionales están facultados para deducir las acciones colectivas, de grupo o tuitivas de intereses difusos que sean necesarias para impugnar cualquier acto de la etapa de preparación de los procesos electorales, por las siguientes razones: Para la consecución de los valores de la democracia representativa, se requiere la elección de los gobernantes mediante el ejercicio del sufragio universal, libre, secreto y directo de la ciudadanía. Para hacer posible el ejercicio del derecho activo y pasivo del voto con esas calidades, se hace indispensable la organización de los procesos electorales, cuya primera etapa es, precisamente, la preparación de las condiciones necesarias para hacer realidad dicho objetivo. Si los actos preparatorios son de carácter instrumental respecto al ejercicio del derecho al sufragio que se lleva a cabo en la jornada electoral, es indudable que las deficiencias, irregularidades o desviaciones de tales actos preparatorios, afectan el interés de cada uno de los ciudadanos que pueden votar en los comicios que posteriormente se deben celebrar. Sin embargo, la ley no confiere a los ciudadanos ninguna acción jurisdiccional para la defensa de ese interés, ni en forma individual ni en conjunto con otros ciudadanos, sino

que sólo les otorga acción respecto de algunas violaciones directas al citado derecho político, y ni siquiera les permite invocar en estos casos como agravios las violaciones cometidas durante el proceso electoral, como causantes de la conculcación directa del derecho político, ya que tiene establecido que los actos preparatorios se convierten en definitivos e inimpugnables al término de esa etapa del proceso electoral. Las circunstancias apuntadas ubican a los intereses de los ciudadanos en los actos de preparación del proceso electoral en condición igual a los que la doctrina contemporánea y algunas leyes denominan intereses colectivos, de grupo o difusos, que tienen como características definitorias corresponder a todos y cada uno de los integrantes de comunidades de personas indeterminadas, comunidades que crecen y disminuyen constantemente, carecen de organización, de representación común y de unidad en sus acciones, y respecto de cuyos intereses colectivos, de grupo o difusos, se han venido diseñando acciones jurisdiccionales con el mismo nombre, pero dotadas de cualidades acordes con su finalidad y naturaleza, y por tanto, diferentes a las de las acciones tradicionales construidas para la tutela directa de derechos subjetivos claramente establecidos y acotados, acciones individuales que se conceden solamente a los sujetos que se puedan ver afectados directa e individualmente por determinados actos. En consecuencia, en procesos jurisdiccionales nuevos, como los de la jurisdicción electoral, se deben considerar acogidos estos tipos de acciones, cuando se produzcan actos que afecten los derechos de una comunidad que tenga las características apuntadas, y que sin embargo no se confieran acciones personales y directas a sus integrantes para combatir tales actos, siempre y cuando la ley dé las bases generales indispensables para su ejercicio, y no contenga normas o principios que las obstaculicen. En la legislación electoral federal mexicana, no existen esos posibles obstáculos, porque sólo exige que los actores tengan un interés jurídico, como se advierte, por ejemplo, en el artículo 40, apartado 1, inciso b) de la primera ley citada, pero no se requiere que este interés derive de un derecho subjetivo o que el promovente resienta un perjuicio personal y directo en su acervo puramente individual, para promover los medios de impugnación válidamente. Para este efecto, los partidos políticos son los entes jurídicos idóneos para deducir las acciones colectivas descritas, porque tal actividad encaja perfectamente dentro de los fines constitucionales de éstos, en cuanto entidades de interés público, creadas, entre otras cosas, para promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional, y como organizaciones de ciudadanos hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, en cuyos procesos se deben observar invariablemente los principios de constitucionalidad y legalidad, mismos a quienes se confiere la legitimación preponderante para hacer valer los medios de impugnación en esta materia, según se ve en los artículos 13, apartado 1, inciso a); 35, apartados 2 y 3; 45, apartado 1, incisos a) y b), fracción I; 54, apartado 1, inciso a); 65, apartado 1, y 88, apartado 1, todos de la citada ley de medios de impugnación.

En razón de lo antes expuesto pasamos a exponer los conceptos de invalidez que consideramos agravia la norma impugnada

PRIMER CONCEPTO DE INVALIDEZ. VIOLACIONES AL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA POR QUE LA NORMA NO CUMPLE LOS PRINCIPIOS DE IMPERSONALIDAD, ABSTRACCIÓN Y GENERALIDAD. En primer lugar, cabe señalar que antes y después de la presentación de la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción III al artículo 11 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, fue y es del dominio público que la misma se presenta ante el Congreso local para permitirle a la C. Ingeniero NORMA ROCÍO NAHLE GARCÍA, originaria del Estado de Zacatecas, ser candidata a la Gubernatura del Estado de Veracruz por parte del Partido Político "Morena", en dos mil veinticuatro, información que fue dada tanto por el Diputado C. JUAN JAVIER GÓMEZ CAZARÍN, quien es Coordinador del Grupo Legislativo de "Morena" y Presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXVI Legislatura del H. Congreso del Estado; así como por el C. CUITLÁHUAC GARCÍA JIMÉNEZ, en su carácter de Gobernador del Estado por Morena. Tan es así que los propios medios de comunicación en la entidad denominaron a dicha iniciativa como la "Ley Nahle".

Cabe señalar que aunque dicha Iniciativa se presenta para que: "... las personas que llegan al territorio veracruzano con la esperanza de crecimiento, inversión, así como nuevas oportunidades de vida y, a la postre, con su trabajo y esfuerzo aportan a la vida pública y a la sociedad de forma política, económica y cultural, abonando con ello al crecimiento y desarrollo del Estado de Veracruz...", en la fracción III adicionada al artículo 11 de la Constitución local de Veracruz, no se refleja de qué forma —con la misma—, se abonará al crecimiento de Veracruz, como lo establece su Exposición de Motivos.

Toda Ley es una regla o norma jurídica de carácter obligatorio y tienen como fin primordial establecer derechos y/o obligaciones a las personas, con el objeto de regular sus conductas y su comportamiento a fin de lograr la convivencia armoniosa dentro de una sociedad.

Las Leyes son de carácter "coercitivo", esto significa que en caso de que las leyes no sean cumplidas, la fuerza pública tiene el deber y obligación de sancionar a la persona o institución correspondiente. Por eso, muchas veces los individuos deben someterse a las leyes a pesar de no estar de acuerdo con ellas.

Las características principales de todas las leyes –entre otras-, deben ser:

I. Obligatorias. Deben ser respetadas y cumplidas por todos los ciudadanos que estén en el territorio en el que rijan esas leyes, incluso, cuando estas vayan en contra de la voluntad del individuo.

II. Abstractas. Se aplican en todos los casos, lo que implica un número de casos no establecidos ni particularizados.

III. Impersonales. Las leyes no son nominales, es decir, no van dirigidas a personas o grupo de personas en concreto o en particular, sino que se dirigen a la sociedad en su conjunto; y

IV. Generales. Las leyes son dictadas para que sean cumplidas por toda la población a la que hace referencia dicha ley en su regulación.

Se puede decir que la Ley es el control externo que existe para la conducta humana –en pocas palabras-, las normas que rigen nuestra conducta social. Por ende, las leyes no se emiten para regular o resolver casos individuales, ni para personas o grupos determinados, su impersonalidad y abstracción las conducen a la generalidad.

Criterio que ha sido sostenido por esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis jurisprudencia cuyo rubro y texto es el siguiente:

"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PARA DETERMINAR SU PROCEDENCIA EN CONTRA DE LA LEY O DECRETO, NO BASTA CON ATENDER A LA DESIGNACIÓN QUE SE LE HAYA DADO AL MOMENTO DE SU CREACIÓN, SINO A SU CONTENIDO MATERIAL QUE LO DEFINA COMO NORMA DE CARÁCTER GENERAL. Para la procedencia de la acción de inconstitucionalidad es preciso analizar la naturaleza jurídica del acto impugnado y, para ello, es necesario tener en cuenta que un acto legislativo es aquel mediante el cual se crean normas generales, abstractas e impersonales. La ley refiere un número indeterminado e indeterminable de casos y va dirigida a una pluralidad de personas indeterminadas e indeterminables. El acto administrativo, en cambio, crea situaciones jurídicas particulares y concretas, y no posee los elementos de

generalidad, abstracción e impersonalidad de las que goza la ley. Además, la diferencia sustancial entre una ley y un decreto, en cuanto a su aspecto material, es que mientras la ley regula situaciones generales, abstractas e impersonales, el decreto regula situaciones particulares, concretas e individuales. En conclusión, mientras que la ley es una disposición de carácter general, abstracta e impersonal, el decreto es un acto particular, concreto e individual. Por otra parte, la generalidad del acto jurídico implica su permanencia después de su aplicación, de ahí que deba aplicarse cuantas veces se dé el supuesto previsto, sin distinción de persona. En cambio, la particularidad consiste en que el acto jurídico está dirigido a una situación concreta, y una vez aplicado, se extingue. Dicho contenido material del acto impugnado es el que permite determinar si tiene la naturaleza jurídica de norma de carácter general."

De conformidad a lo establecido por el "SISTEMA DE INFORMACIÓN LEGISLATIVA" (SIL), el "Acto Legislativo", es la acción por la cual se fórmula una regla general impersonal, abstracta y general ya sea que emane del Poder Ejecutivo o del H. Congreso de la Unión o de alguna autoridad con facultades para hacerlo. En el contexto del derecho parlamentario es la facultad para crear, modificar o extinguir relaciones de derecho, otorgada a un organismo o representante de la sociedad. En los estados donde impera una forma de gobierno con división de poderes, esta facultad corresponde al denominado Poder Legislativo.

La integración de la Ley se encuentra limitada por la norma Constitucional, desafortunadamente el "DECRETO 240 POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 11 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE", aprobado por la LXVI Legislatura del H. Congreso del Estado, promulgado por el Gobernador del Estado y publicado por el Director de la Gaceta Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz, bajo el Número Extraordinario 318, Tomo CCV, de fecha once de agosto de dos mil veintidós, no cubre la impersonalidad, abstracción y la generalidad que toda Ley debe de cumplir, con ello se violenta lo establecido en el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que señala:

"Artículo 13. Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o corporación puede tener fuero, ni gozar más emolumentos que los que sean compensación de servicios públicos y estén fijados por la ley. Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar; pero los tribunales militares en

ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército. Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda."

Numeral que desde una interpretación conforme, prohíbe que una Ley pueda ser en beneficio o perjuicio de una persona o grupo de personas en particular.

Es por ello que bajo el pretexto de que el Decreto 240, tendrá como objetivo dar a las personas que llegan al territorio veracruzano con la esperanza de crecimiento, inversión, así como nuevas oportunidades de vida darles la calidad de "veracruzanos" y, con ello, aportarán al crecimiento y desarrollo del Estado de Veracruz, hacen un traje a la medida para que una persona no originaria ni vecina del Estado, pero con un hijo nacido en Veracruz, pueda alcanzar el estatus de "veracruzana" y con ello burlar a la norma Constitucional de la entidad y registrarla como candidata a la Gubernatura del Estado en el próximo proceso electoral local a efectuarse en el dos mil veinticuatro; para así, violar su espíritu. A esto se le conoce como: *fraus legis facta*, o "Fraude a la Ley", una figura que dimana del derecho privado, con su origen en el derecho romano. Una definición inicial la podemos encontrar en la siguiente tesis aislada del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito:

"FRAUDE A LA LEY E INTERPRETACIÓN LÓGICA. SU CONCEPTO. La figura del fraude a la ley, fraus legis o in fraudem legis agere, como se le conoció en el derecho romano, consiste en respetar la letra violando el espíritu de la ley. Sobre el particular, es atendible el texto de Paulo, visible en el parágrafo 29, Título III, Libro I, del Digesto: Contra legem facit, qui id facit, quod lex prohibet; in fraudem vero, qui salvis verbis legis sententiam eius circumvenit. Esto es: Obra contra la ley el que hace lo que la ley prohíbe; y en fraude, el que salvadas las palabras de la ley elude su sentido. Dicho en otros términos: fraude a la ley es frustrar sus propósitos, es violar o eludir el espíritu que la anima y llevar a un resultado contrario al deseado, con el pretexto de respetar su letra; en cuya situación se está finalmente en contra de la ley, al ser esa aplicación literal contraria a la intención del legislador. En relación con lo anterior, debe tenerse en cuenta que mientras que la interpretación literal de la ley es la que determina el sentido propio de las palabras, la interpretación lógica es la que fija el verdadero sentido o fin que persigue la ley.

MARÍA ELENA MANSILLA Y MEJÍA complementa esta definición y dice que el fraude a la Ley consiste "en la conducta totalmente voluntaria realizada

con el exclusivo fin de obtener un fin ilícito a través de un medio lícito". Permitir a una persona que no es nativa de la entidad y que nunca a residido en él, pero que tiene un hijo que por circunstancias particulares nació en Veracruz, ser "veracruzana" para no tener impedimentos Constitucionales para ser Candidata a la Gubernatura del Estado; pero, que, además, hacen la adhesión en el artículo 11, del Capítulo III "De los Veracruzanos, de los Vecinos y de los Ciudadanos", de la Constitución local de Veracruz, y no en el artículo 43 de la Constitución en cita, y que señala los requisitos para ser Gobernador del Estado, con la única intención de que los Partidos Políticos no pudiera acceder a la Acción de Inconstitucionalidad por no ser materia electoral a sabiendas que el número de Diputados de oposición de la LXVI Legislatura del H. Congreso del Estado no son los suficientes para interponer dicha Acción de Inconstitucionalidad; se conculca un Fraude a la Ley.

Para profundizar, el "DECRETO 240 POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 11 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE", es un Fraude a la Ley que sigue la estructura lógica del abuso del derecho. Es decir, el fraude a la ley es el género y el abuso del derecho, la especie. Este concepto surge del derecho civil francés; que hizo la doctrina del abuso del derecho postulada por JOSSERAND en mil novecientos cinco y que puede definirse de la forma siguiente:

"1º Habrá abuso de un derecho cuando el titular disimule bajo el ejercicio de un derecho un acto ilícito, que no figura en el contenido del derecho...., 2º En ciertos casos en que la responsabilidad no está fundada en la culpa, puede resultar del acto realizado en el ejercicio de un derecho porque está ligada aún a una actividad lícita. Se necesita por lo tanto determinar las modalidades del ejercicio del derecho para saber en qué momento empieza la responsabilidad. El acto llamado abusivo es aquí simplemente el acto anormal, es decir aquel que excede las condiciones habituales del ejercicio del derecho. Por ejemplo, un industrial que explota con una autorización administrativa una industria en condiciones tales que causa perjuicio a las propiedades vecinas, es declarado responsable de ese perjuicio y se dice que abusó su derecho."

En el caso del acto reclamado, el abuso de derecho se traduce en un abuso competencial que comprende los siguientes elementos:

I. Competencia otorgada: Los requisitos establecidos en el artículo 11 para ser "veracruzano", en vigor hasta el día once de agosto de dos mil veintidós.

II. La autoridad que la ejerce: El Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y los Ayuntamientos que aprobaron su redacción Constitucional.

III. La otorgante de la competencia: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

IV. Acto realizado: La adición de la fracción III al artículo 11 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, contenida en el Decreto 240 publicado en la Gaceta Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz, bajo el Número Extraordinario 318, Tomo CCV, de fecha once de agosto de dos mil veintidós.

V. Normativa violada por el acto: La propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

VI. Daño: Se Permite a una persona que no es nativa de la entidad [nacida en Zacatecas] y que nunca ha residido en Estado, pero que tiene un hijo que por circunstancias particulares nació en Veracruz, ser "veracruzana" para no tener impedimentos Constitucionales para ser Candidata a la Gubernatura del Estado.

Puede decirse que lo antes expuesto redundaría en una violación al principio de legalidad, de una forma tal que el uso indebido de una competencia Constitucional vuelve incompetentes al Congreso del Estado y a los Ayuntamientos; es decir, hacer mal uso de una competencia implica dejar de ser la autoridad idónea para efectos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Adicional a lo anterior, es importante mencionar que las leyes son normas de conducta que tienen las siguientes características:

1o. Generalidad: los supuestos de la Ley (hechos, actos, situaciones) valen para todos los individuos sin especificaciones ni distinciones particulares. El supuesto establece una condición común que tiene la misma fuerza obligatoria para todos: "la Ley es la misma para todos".

La Ley puede referirse, sin perder su generalidad, a un grupo determinado de personas individuales relacionadas con situaciones, hechos o actos específicos debido a cierto tipo de actividades, siempre y cuando se cubra a

todos ellos por igual: comerciantes (leyes mercantiles), patrones y trabajadores (leyes del trabajo), profesionistas (leyes de profesiones), etcétera.

Por tanto, la generalidad de la Ley es una característica esencial de la norma jurídica, equivale en su aplicabilidad a cuantas personas se encuentren en un supuesto determinado.

La Ley no mira al individuo particular, sino a la comunidad general. No se da para individuos determinados.

Puntualizado lo anterior, procede transcribir el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone:

"Artículo 13. Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o corporación puede tener fuero, ni gozar más emolumentos que los que sean compensación de servicios públicos y estén fijados por la ley. Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar; pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército. Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda."

La idea jurídica de igualdad que parte del referido artículo establece que frente a una situación jurídica determinada todos los gobernados pueden asumir los mismos deberes y derechos dentro de las garantías que consagra la Ley Fundamental, las que se contienen en el precepto transcrito, son:

- a. Nadie puede ser juzgado por leyes privativas.
- b. Nadie puede ser juzgado por tribunales especiales.
- c. Ninguna persona o corporación puede tener fuero.
- d. Ninguna persona o corporación puede gozar de más emolumentos que los que sean compensación de servicios públicos y estén fijados por la ley.
- e. Los tribunales militares en ningún caso y en ninguna circunstancia pueden extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército.
- f. Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda.

El citado precepto consagra, en términos generales, la garantía de igualdad jurídica, proscribiendo la aplicación de leyes que no sean generales,

abstractas y permanentes; es decir, la teología del artículo en cita es la de consagrar la plena igualdad ante la Ley.

Ahora bien, toda disposición legal desde el punto de vista material es un acto jurídico que crea, modifica, extingue o regula situaciones jurídicas abstractas, impersonales y generales, es decir, sin contraerse a personas particularmente consideradas o a un número determinado de individuos.

Así, la Ley, como acto formal y materialmente legislativo, es aquel que emite la autoridad legislativa que regula una situación jurídica para el futuro, siendo de observancia obligatoria, general y abstracta.

Dichos conceptos se pueden explicar de la siguiente manera:

a. Obligatoriedad. Las leyes mientras no pierdan su vigencia por ser abrogadas, derogadas, reformadas o anuladas por las autoridades competentes, deben ser obedecidas por las personas que se ubiquen dentro de la hipótesis normativa respectiva.

b. Generalidad. La ley constituye en sí misma una disposición que no desaparece después de su aplicación a un caso previsto y determinado previamente, sino que pervive a esta aplicación y se sigue aplicando, mientras no se derogue, a todos los casos idénticos al previsto.

c. Abstracción. La Ley se emite previéndose una hipótesis normativa, sin elaborarse para un acto determinado.

d. Impersonalidad. La Ley se aplicará a todos los sujetos que se ubiquen en la hipótesis normativa, esto es, la Ley no se elabora para un individuo particularmente identificado.

e. Efectos hacia el futuro. La Ley no puede tener vigencia para el pasado, pues sería retroactiva y, por ende, contraria a lo dispuesto en la Constitución Federal.

Bajo esa perspectiva, es dable sostener que, atendiendo a las características que debe tener la Ley, en caso de que una norma no contenga alguno de los requisitos enunciados, sino que esté concebida en tal forma que permita, injustificadamente, su no aplicación en algunos casos o llevar a cabo la misma en detrimento de los derechos de sujetos particularmente identificados, se tratará entonces, de una Ley que atenta contra el principio de generalidad que consagra el artículo 13 Constitucional en cita.

En torno al tema de las leyes privativas, que es el aspecto que para el presente asunto interesa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha integrado las jurisprudencias que se reproducen enseguida:

"LEYES PRIVATIVAS, CONCEPTO CONSTITUCIONAL DE. El artículo 13 de la actual Constitución General de la República establece que «nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales». Este artículo 13 es idéntico al del mismo número de la Constitución de 1857 que prohibió, en iguales términos ser juzgado por leyes privativas y por tribunales especiales. La génesis de esta disposición constitucional mexicana puede encontrarse en el artículo 3o. de la declaración francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1789, que instituyó, por vez primera, como garantía de la persona humana, que la ley «debe ser la misma para todos». Está fuera de toda discusión que la Constitución de los Estados Unidos de América, del 17 de septiembre de 1787, no incluyó, entre sus cláusulas más importantes, el capítulo relativo a los derechos del hombre. No es sino hasta las enmiendas que sufre posteriormente, cuando se establece como derecho individual público, la igualdad ante la ley, llegando a consignar en su Enmienda 14, que «ningún Estado podrá negar, a persona alguna bajo su jurisdicción, la igual protección de las leyes». La Constitución de Apatzingán del 22 de octubre del año de 1814, recoge estos principios de las Constituciones de Francia y de los Estados Unidos de América, y lo dispuso, así, en su artículo 19, que la ley debe ser igual para todos, principios respetados y conservados, después, tanto en el primer proyecto de Constitución Política de la República Mexicana, del 25 de agosto de 1842, como en el voto particular de la minoría de la Comisión Constituyente y en el segundo proyecto de Constitución, del 2 de noviembre de aquel año de 1842, al través de las prescripciones contenidas, respectivamente, en sus artículos 7o., fracción II, 5o., fracción XV y 13 fracciones I y III, que mantienen el derecho fundamental del individuo a la protección concretada en la generalidad de la ley. Sembrada la idea de que todos deben ser iguales ante la ley, o bien, proscrita la aplicación de las leyes privativas, su aceptación en documentos internacionales se imponía. Por ello, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, del 10 de diciembre de 1948, con obligatoriedad para todos los países que han suscrito, determinó en su artículo 7o. que «todos son iguales ante la ley y tienen derecho, sin distinción, a igual protección de la ley». La coincidencia no sólo conceptual, sino también terminológica de los artículos 13 de las mexicanas Constituciones de 1857 y 1917, justifica conocer la interpretación, sentido y alcances que se dio a la expresión ley privativa en la primera de esas Leyes Fundamentales, para después orientar la noción de la ley privativa en la doctrina y en la Constitución mencionada en segundo lugar. Vallarta, en sus «Votos», tomo III, páginas 67 a 72, fijó con toda nitidez el concepto de la ley privativa en estos términos: «... no puede tenerse como privativas aquellas leyes que se refieren sólo a determinada clase de personas, en razón de las circunstancias especiales en que se encuentran, y por esto nadie califica de privativas a las leyes sobre los menores, los incapacitados, los comerciantes, los quebrados, los militares,

etc., y todas las razones que no necesito exponer, que se oponen a que se haga esta calificación de tales leyes, existen para que tampoco se llame privativo al impuesto sobre fabricantes, propietarios, agricultores mineros, exportadores, etc. Después de esas ejecutorias no es ya lícito venir ante los tribunales a negar la constitucionalidad de un impuesto, únicamente porque él no pesa sobre todos los contribuyentes, sino sólo sobre determinada industria, giro, propiedad, etcétera; por la sola razón de que no siendo general la ley que lo establece, es privativa y en consecuencia contraria al artículo 13 de la Constitución». La doctrina de Vallarta es tan convincente, que basta para ello fijar la atención en que expresamente consideró que no puede llamarse ley privativa a las que decretan sobre fabricantes, propietarios, agricultores, mineros, como tampoco tienen ese carácter las leyes impositivas que estatuyen impuestos, no sobre todos los contribuyentes, sino sólo sobre determinada industria, giro, propiedad. De otra parte Coronado, en su obra *Derecho Constitucional Mexicano*, página 31, 1887, también hace una interpretación doctrinaria del artículo 13 de la Constitución de 1857, sosteniendo que «La ley, pues, tiene carácter de generalidad; y aun cuando se refiera a persona determinada, como las que habitan de edad a un menor o declaran electo a un funcionario, no hacen más que reconocer una condición que se relaciona con el orden social pero entrañan un precepto común, obligatorio para todos. Así también, las leyes que otorgan ciertos beneficios a las mujeres, a los menores, etcétera, por razones de clara justicia no quitan a la solemne declaración legislativa su sello de generalidad». Doce años antes de la promulgación de la Constitución de 1917, esto es, en 1905, Gonzalo Espinosa publicó sus *Principios de Derecho Constitucional*, tomo I, página 299 y 302, y sus comentarios al artículo 13 fueron de esta índole: «... de este texto tan claro de la declaración, se pretende concluir que ésta proclama la igualdad material o económica o aun intelectual de los hombres, y así, sujetarlos a una especie de nivelación general establecida por la fuerza, que sería la negación misma de todos los derechos. Para que se comprenda nuestra idea, haremos presente que la condiciones de todos los seres en la sociedad no son las mismas bastando para comprobar este hecho que no todos están dotados igualmente de inteligencia y voluntad, ni tampoco su desarrollo moral es el mismo; de esto resulta que, para obtener, en lo posible, la igualdad ante la ley, el derecho haya introducido distintas reglas, que sería largo enumerar, ya en lo relativo a la capacidad de las personas para obligarse, ya supliendo el discernimiento, la inexperiencia, la debilidad del sexo o la edad; con la intervención de terceras personas que de algún modo hagan el que se obtenga la igualdad ante la ley.». Espinosa, también, da un sentido de ley privativa que se aleja del concepto de lo universal, acercándose a las desigualdades materiales y económicas que exigen tratamientos distintos en las normaciones jurídicas o legales. En la compilación jurisprudencial anterior (1917 a 1954), reproducida por la actual (1917-1965), la Suprema Corte de Justicia de la Nación expuso su criterio sobre lo que debe entenderse por ley privativa, consignándose en la tesis número 643, visible a páginas 1147 y 1148, lo siguiente: «Es carácter constante de las leyes, que sean de aplicación general y abstracta (es decir, que deben contener una disposición que no desaparezca después de aplicarse a un caso previsto y determinado de antemano, sino que sobreviva a esta aplicación y, se apliquen sin

consideración de especie o de persona, a todos los casos idénticos al que previenen, en tanto que no sean abrogadas). Una ley que carece de esos caracteres, va en contra del principio de igualdad garantizado por el artículo 13 constitucional, y aun deja de ser una disposición legislativa, en el sentido material, puesto que le falta algo que pertenece a su esencia. Las leyes pueden considerarse como privativas, tanto las dictadas en el orden civil como en cualquier otro orden, pues el carácter de generalidad, se refiere a las leyes de todas las especies, y contra la aplicación de las leyes privativas, protege el ya expresado artículo 13 constitucional». Y la misma Suprema Corte, es precedente de la tesis jurisprudencial que aparece en la página 897 del Tomo XXXVI del Semanario Judicial de la Federación, ha estimado que: «La circunstancia de que un decreto comprenda a un determinado número de individuos, no implica que se le considere privativo, pues para ello se requiere que la disposición se dicte para una o varias personas a las que se mencione individualmente, pues para las leyes relativas a cierta clase de personas, como los mineros, los fabricantes, los salteadores, los propietarios de alguna clase de bienes, etc., no son disposiciones privativas, porque comprenden a todos los individuos que se encuentra o lleguen a encontrarse en la clasificación establecida». El análisis doctrinario de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conduce necesariamente a estas conclusiones: a) La ley es privativa, si la materia de que se trata desaparece después de aplicarse a un caso previsto y determinado de antemano; b) La ley es también privativa cuando menciona individualmente (nominalmente) a las personas a las que se va aplicar; c) La ley no es privativa cuando se aplica sin consideración de especie o de personas a todos los casos que previene; d) La ley no es privativa cuando comprende a un determinado número de individuos; y e) Las leyes relativas a cierta clase de personas como los mineros, los fabricantes, los salteadores, los propietarios de alguna clase de bienes no son disposiciones privativas, porque comprenden a todos los individuos que se encuentran o lleguen a encontrarse en la clasificación establecida.

"LEYES PRIVATIVAS. Es carácter constante de las leyes que sean de aplicación general y abstracta (es decir, que deben contener una disposición que no desaparezca después de aplicarse a un caso previsto y determinado de antemano, sino que sobreviva a esta aplicación, y se apliquen sin consideración de especie o de persona a todos los casos idénticos al que previenen, en tanto no sean abrogadas). Una ley que carece de esos caracteres, va en contra del principio de igualdad, garantizado por el artículo 13 constitucional, y aun deja de ser una disposición legislativa en el sentido material, puesto que le falta algo que pertenece a su esencia. Las leyes pueden considerarse como privativas, tanto las dictadas en el orden civil como en cualquier otro orden, pues el carácter de generalidad se refiere a las leyes de todas las especies, y contra la aplicación de las leyes privativas protege el ya expresado artículo 13 constitucional.

De acuerdo con las tesis transcritas, una Ley es privativa cuando se dirige a un individuo o individuos en lo particular, esto es, a un conglomerado específico de la población en general; por lo mismo, es contraria a la

Constitución y debe ser invalidada, como sucede en el caso de cuenta, es por lo anterior que se solicita la invalidez del decreto impugnado.

SEGUNDO CONCEPTO DE INVALIDEZ. VIOLACIONES AL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA POR NO SEGUIRSE LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. En segundo lugar, el artículo 84 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece la facultad del Congreso del Estado para realizar reformas a la Constitución Política local, la cual se debe aprobar por las dos terceras partes de los miembros del Congreso local y con la aprobación de la mayoría de los Ayuntamientos en Sesión Extraordinaria de Cabildo. A saber:

"Artículo 84. Esta Constitución podrá ser reformada en todo o en parte por el Congreso del Estado. Las reformas deberán ser aprobadas por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Congreso.

Para que las reformas formen parte de esta Constitución será necesaria la aprobación de la mayoría de los ayuntamientos, la que deberá darse en sesión extraordinaria de Cabildo y comunicarse al Congreso o a la Diputación Permanente dentro de los treinta días naturales siguientes a aquel en que reciban el proyecto. Se tendrán por aprobadas las reformas por parte de los ayuntamientos si, transcurrido el plazo referido, no hubieren comunicado su acuerdo. No será necesaria la aprobación de los ayuntamientos, cuando las reformas tengan como propósito efectuar adecuaciones derivadas de un mandato de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de disposiciones emanadas de leyes nacionales, únicas o generales expedidas por el Congreso de la Unión, o de declaratorias de invalidez emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en estos casos, el Congreso declarará previamente que se trata de un procedimiento especial.

Para la reforma total o la abrogación de las disposiciones contenidas en esta Constitución, será obligatorio el referendo que señala el artículo 17 de este ordenamiento.

El Congreso o la Diputación Permanente hará el cómputo de los votos de los ayuntamientos y, en su caso, la declaratoria de que han sido aprobadas las reformas.

El procedimiento para las reformas constitucionales se reglamentará en la ley."

Cabe señalar que de conformidad al último párrafo del artículo 84 de la Constitución local antes transcrito, la que local que establece el procedimiento para llevar a cabo toda reforma Constitucional parcial es la "Ley Reglamentaria del Artículo 84 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en Materia de Reformas Constitucionales Parciales", establece el apego

al procedimiento legislativo como requisito de procedencia de una reforma Constitucional, tal y como se señala en sus artículos 3 y 6, a saber:

"Artículo 3. Las iniciativas con proyecto de decreto de reforma constitucional cumplirán todos los trámites del proceso legislativo señalados en la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

Artículo 6. Los dictámenes formulados por las comisiones del Congreso, relativos a proyectos de decreto de reforma constitucional, serán enlistados preferentemente en el orden del día de la sesión del Pleno inmediata a la fecha en que se hayan depositado en la Junta de Trabajos Legislativos, para su discusión y votación."

De lo anterior se colige que, si estos preceptos no son cumplidos a cabalidad, existe un vicio en el origen de la norma Constitucional que se haya expedido, toda vez que el acto legislativo es una unidad indisoluble y al existir una falla en una de las partes que lo constituyen, se contamina la totalidad del acto. Así lo ha entendido el más alto Tribunal de la Nación en su jurisprudencia P./J.35/2004, mismo que señala:

"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS ACTOS QUE INTEGRAN EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO SÓLO PUEDEN IMPUGNARSE A PARTIR DE QUE ES PUBLICADA LA NORMA GENERAL. Los actos que integran el procedimiento legislativo constituyen una unidad indisoluble con la norma general emanada de ese procedimiento, de tal forma que no procede impugnar cada acto legislativo individualmente, ya que no puede quedar subsistente o insubsistente aisladamente, sino sólo a través del análisis conjunto de esos actos con motivo de la publicación de la norma; por otra parte, de conformidad con los artículos 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la propia Constitución Federal, el plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional combatidos sean publicados en el medio oficial correspondiente, de lo cual se concluye que la impugnación de los actos que integran el procedimiento legislativo únicamente puede realizarse a partir de que es publicada la norma general, porque es en ese momento cuando los actos adquieren definitividad.

Todo vicio en el proceso legislativo transgrede también el principio de legalidad consagrado en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues si se contraviene la Ley, no puede considerarse a la norma correctamente fundamentada; por otro lado, se violenta el principio de

seguridad jurídica contenido en el artículo 14 del mismo Ordenamiento Supremo, pues si la Ley que se emitió con un vicio formal de origen puede justificar actos de privación, no se siguen las formalidades esenciales del procedimiento —las cuales deben interpretarse armónicamente con el artículo 72 de la Constitución General de la República en cita, para incluir lo legislativo-, y al no hacerlo, se impide al gobernado tener certeza de que no está sujeto a decisiones arbitrarias por parte de las autoridades.

En primer lugar, la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales no convocó a reunión, para recibir la iniciativa y darle lectura, y por consiguiente, no se difundió en medios electrónicos oficiales, aun cuando los artículos 45 párrafos primero y tercero y 106 párrafo primero, del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así lo requiere:

“Artículo 45. Las comisiones se reunirán a convocatoria de su presidente en el lugar y hora que al efecto fije, mediante notificación indubitable a los integrantes de la misma, ya sea por escrito o por comunicación digital a través de sus cuentas de correo electrónico oficial, con cuarenta y ocho horas de anticipación. De no convocar, el secretario y el vocal lo conminarán por escrito o por comunicación digital y, de persistir en la negativa, sesionarán el día y la hora que determinen, sin perjuicio de informar de ello al Pleno. El quórum será de simple mayoría. Sólo habrá dictamen cuando lo firme la mayoría de sus miembros.

[...]

Las reuniones de las comisiones serán públicas y se transmitirán mediante los medios electrónicos oficiales, con excepción de las que por su naturaleza o los asuntos a tratar, deban ser privadas.

Artículo 106. Recibida por el Presidente de la comisión la iniciativa o solicitud correspondiente será inmediatamente distribuida entre sus miembros y se citará a una sesión en la que se le dará lectura, se designarán los apoyos técnicos legislativos y se acordarán las consultas y comparecencias de los servidores públicos o de particulares que se considere procedente.

[...]

[...]”

Por otra parte, es del dominio público que dicha iniciativa se presentaría para que una persona pudiera ser registrada y competir a la Gubernatura del Estado por el Partido Político Morena, por así decirlo a los medios informativos

tanto el Coordinador del Grupo Legislativo de Morena ante el Congreso del Estado, como el Gobernador del Estado.

De igual manera, dicha iniciativa fue turnada a una Comisión Permanente que se encuentra conformada por la Diputada y los Diputados CC. LUIS FERNANDO CERVANTES CRUZ [Morena], MARLON EDUARDO RAMÍREZ MARÍN [Partido Revolucionario Institucional] y ROSALINDA GALINDO SILVA [Morena], y únicamente fue Dictaminada por la y el Diputado CC. LUIS FERNANDO CERVANTES CRUZ y ROSALINDA GALINDO SILVA –ambos del Grupo Legislativo de Morena–; esto representa un conflicto de interés en términos del artículo 9 párrafo primero fracción IX, del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado:

“Artículo 9. Son obligaciones de los diputados, además de las establecidas por el artículo 17 de la Ley y las relativas del artículo 46 de la ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave, las siguientes:

I. a VIII. [...]

IX. Excusarse de participar en las comisiones cuando tengan interés personal o profesional en un asunto, dando aviso al presidente de la propia comisión. Si éste fuere el interesado, lo hará del conocimiento de la Junta de Coordinación Política para que proponga al Pleno quién deba sustituirlo;

X. a XVIII. [...]”

La Presidencia de la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales de la LXVI Legislatura del H. Congreso del Estado no publica la Convocatoria, Orden del día y documentos que se analizarían en la Sesión de dicha Comisión Permanente donde se analizó y dictaminó la “iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción III al artículo 11, de la Constitución Política del Estado”, con por lo menos cuarenta y ocho horas de anticipación, tal y como lo señala los párrafos cuarto y sexto del artículo 38, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave:

“Artículo 38. [...]

[...]

[...]

Es obligación de las Comisiones permanentes y especiales, publicar su programa anual de trabajo, así como las convocatorias, orden del día y documentos de apoyo, con 24 horas de anticipación de cada sesión.

[...]

Las obligaciones establecidas en los dos párrafos anteriores, deberán ser publicadas en el Portal Oficial del Congreso del Estado dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la celebración de las sesiones."

Reiteramos que estas violaciones al procedimiento parlamentario vician la norma aprobada, pues no se cumple con los requisitos que establece la ley; sin embargo, también se falta a las formalidades esenciales del procedimiento parlamentario, la cual se ha desarrollado en el ámbito judicial en la tesis plenaria P.L/2008:

"PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS CUYO CUMPLIMIENTO SE DEBE VERIFICAR EN CADA CASO CONCRETO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA INVALIDACIÓN DE AQUÉL. Para determinar si las violaciones al procedimiento legislativo aducidas en una acción de inconstitucionalidad infringen las garantías de debido proceso y legalidad contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y provocan la invalidez de la norma emitida, o si por el contrario no tienen relevancia invalidatoria de esta última, por no llegar a trastocar los atributos democráticos finales de la decisión, es necesario evaluar el cumplimiento de los siguientes estándares: 1) El procedimiento legislativo debe respetar el derecho a la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en condiciones de libertad e igualdad, es decir, resulta necesario que se respeten los cauces que permiten tanto a las mayorías como a las minorías parlamentarias expresar y defender su opinión en un contexto de deliberación pública, lo cual otorga relevancia a las reglas de integración y quórum en el seno de las Cámaras y a las que regulan el objeto y el desarrollo de los debates; 2) El procedimiento deliberativo debe culminar con la correcta aplicación de las reglas de votación establecidas; y, 3) Tanto la deliberación parlamentaria como las votaciones deben ser públicas. El cumplimiento de los criterios anteriores siempre debe evaluarse a la vista del procedimiento legislativo en su integridad, pues se busca determinar si la existencia de ciertas irregularidades procedimentales impacta o no en la calidad democrática de la decisión final. Así, estos criterios no pueden proyectarse por su propia naturaleza sobre cada una de las actuaciones llevadas a cabo en el desarrollo del procedimiento legislativo, pues su función es ayudar a determinar la relevancia última de cada actuación a la luz de los principios que otorgan verdadero sentido a la existencia de una normativa que discipline su desarrollo. Además, los criterios enunciados siempre deben aplicarse sin perder de vista que la regulación del procedimiento legislativo raramente es única e invariable, sino que incluye ajustes y modalidades que responden a la necesidad de atender a las vicisitudes presentadas en el desarrollo de los trabajos parlamentarios, como por ejemplo, la entrada en receso de las Cámaras o la necesidad de tramitar ciertas iniciativas con extrema urgencia, circunstancias que se presentan habitualmente. En este

contexto, la evaluación del cumplimiento de los estándares enunciados debe hacerse cargo de las particularidades de cada caso concreto, sin que ello pueda desembocar en su final desatención.

Las formalidades esenciales del procedimiento legislativo son aquellos actos concretos que debe cumplir la autoridad para garantizar que haya una deliberación democrática y las reglas que se produzcan no sean producto de un actuar autoritario. En el caso que nos ocupa, no se aplicaron de forma correcta la normativa y no hubo suficiente publicidad en el proceso, aun y cuando las autoridades deben actuar conforme al principio de máxima publicidad establecido en el artículo 6o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Es por estas razones que consideramos que el “DECRETO NÚMERO 240 POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 11 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ”, que impugnamos es inconstitucional, al no cumplirse los requisitos de forma que establecen los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

TERCER CONCEPTO DE INVALIDEZ. VIOLACIONES AL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA POR NO SEGUIRSE LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. En tercer lugar, se violenta lo establecido dentro del Procedimiento Ordinario normado en la “Ley Reglamentaria del Artículo 84 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en Materia de Reformas Constitucionales Parciales”, dándole una interpretación a modo.

Cabe señalar que de conformidad a lo establecido por el párrafo quinto del artículo 84 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el miércoles veintidós de diciembre de dos mil diez, se publica en la Gaceta Oficial, Órgano del gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la “Ley 7 Reglamentaria del Artículo 84 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en Materia de Reformas Constitucionales Parciales”, misma que –al igual que el propio numeral 84 de la Constitución local-, establece dos procedimientos para aprobar las reformas parciales de carácter Constitucional en la entidad, un “Procedimiento Ordinario” y

un "Procedimiento Especial"; el primero, se aplica para toda reforma a la Constitución emanada de cualquier persona que el artículo 34 de la propia Constitución local le da el derecho de iniciativa. Procedimiento que solo tiene que ser aprobado en un solo Periodo Ordinario de Sesiones por las dos terceras partes de los Diputados que integran el Pleno del Congreso y con la aprobación de la mayoría de los Ayuntamientos de la entidad. En tanto que, el segundo, se instituyó en la Ley para aquellas reformas a la Constitución local cuando exista un Decreto de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se ordene expresamente a las Legislaturas de los Estados adecuar sus textos Constitucionales al sentido de aquél, o cuando se hiciere necesario adecuar la Constitución local a disposiciones emanadas de Leyes nacionales, únicas o generales expedidas por el Congreso de la Unión, o como consecuencia de declaratorias de invalidez emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Procedimiento que basta con que la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales y la Junta de Coordinación Política podrán proponer al Pleno, mediante un proyecto de punto de acuerdo, que declare iniciar un Procedimiento Especial de reformas constitucionales, para que el Decreto de reforma pueda ser aprobado en un solo Periodo Ordinario o Extraordinario de Sesiones y sin la necesidad de la aprobación de la mayoría de los Ayuntamientos.

Sostenemos que la LXVI Legislatura del H. Congreso del Estado violenta lo establecido dentro del Procedimiento Ordinario de la Ley Reglamentaria en cita, dándole una interpretación a modo, ya que el Decreto 3 que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria en comento, publicado en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Número Extraordinario 484, Tomo CXCVIII, de fecha martes cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, en sus "Considerandos", que le dan origen, se establece que –entre otros objetivos-, se perseguía únicamente la eliminación de la segunda aprobación, por parte del Congreso del Estado, de los proyectos de reformas Constitucionales en procedimientos ordinarios, conculcado en el artículo 7 de la citada Ley Reglamentaria; ya que antes de la reforma a dicha disposición, señalaba que las reformas parciales de nuestra Constitución local en Procedimientos Ordinarios, se tenían que aprobar en dos Períodos Ordinarios de Sesiones; tan es así que la Ley Reglamentaria en comento, en su redacción

vigente el "Procedimiento Ordinario" se encuentra normado en el "Capítulo II", mismo que desarrolla en dos Secciones, la primera relativa a: "Del Dictamen con Proyecto de Decreto en el Primer Período" y la segunda relativa a: "Del Dictamen con Proyecto de Decreto en el Segundo Período", cuyo articulado de ésta Sección hoy se encuentran derogados por el Decreto 3 del cuatro de diciembre de dos mil dieciocho antes citado, a saber:

*"CAPÍTULO II
Del Procedimiento Ordinario*

*SECCIÓN PRIMERA
Del Dictamen con Proyecto de Decreto en el Primer Período*

Artículo 6. [...]

*(REFORMADO, G.O. 4 DE DICIEMBRE DE 2018)
Artículo 7. [...]*

Artículo 8. [...]

*SECCIÓN SEGUNDA
Del Dictamen con proyecto de Decreto en el Segundo Período*

*(DEROGADO, G.O. 4 DE DICIEMBRE DE 2018)
Artículo 9. Derogado*

*(DEROGADO, G.O. 4 DE DICIEMBRE DE 2018)
Artículo 10. Derogado*

*(DEROGADO, G.O. 4 DE DICIEMBRE DE 2018)
Artículo 11. Derogado"*

De conformidad a lo establecido en la Ley Reglamentaria del Artículo 84 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en Materia de Reformas Constitucionales Parciales, en los Procedimientos Ordinarios en Materia de Reformas Constitucionales Parciales, los Dictámenes formulados por las Comisiones del Congreso, relativos a proyectos de Decreto de Reforma Constitucional se enlistan para su aprobación en su caso, en la sesión del Pleno inmediata, pero debe ser Sesión Ordinaria ya que corresponde a un Procedimiento Ordinario.

Si la Ley Reglamentaria en comento, permitiera que los Dictámenes de reformas Constitucionales en un "Procedimiento Ordinario" pudieran darse en un

período distinto al "Ordinario", lo haría distinguir dentro de este Procedimiento, tal y como lo hace para el "Procedimiento Especial", lo haría tal y como se establece en los artículos 14 y 16 del "Procedimiento Especial" en materia de reformas Constitucionales parciales, mismos que señalan:

"Artículo 14. Si el Congreso se encuentra en receso, el proyecto de punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política se someterá a la Diputación Permanente para que, de estimarlo procedente, ésta convoque a un periodo extraordinario para que el Congreso haga la declaratoria señalada en el artículo inmediato anterior.

Artículo 16. El dictamen con proyecto de decreto de reforma constitucional, dentro de un procedimiento especial, será discutido y votado en una sola sesión, ordinaria o extraordinaria, siempre que de forma previa se haya emitido la declaración a que se refiere el artículo anterior."

El "DECRETO 240 POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 11 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE", que nos encontramos analizando no busca dar cumplimiento a un Decreto que emane de la Constitución General de la República en el que se ordene expresamente a la Legislatura local adecuar sus textos Constitucionales al sentido de aquél, o que se haga necesario adecuar la Constitución local a disposiciones emanadas de una Ley nacional, únicas o general expedida por el Congreso de la Unión, o se esté dando cumplimiento a una declaratorias de invalidez emitidas por esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación; y por dicha situación se haya votado y aprobado en un Periodo Extraordinario de Sesiones; para que una reforma parcial a la Constitución local emanada de un Procedimiento Ordinario pueda ser votada en un Período Extraordinario de Sesiones la Ley Reglamentaria lo debiera establecer como tal previamente, y determine sus consecuencias para el Orden Jurídico, de otra forma violentamos la norma.

En nuestro Sistema Jurídico no es posible concebir la actuación de las autoridades, sino enteramente subordinada al derecho.

Toda autoridad del Estado —entre ellas las y los Diputados de la LXVI Legislatura del H. Congreso del Estado de Veracruz—, sólo pueden actuar cuando la Ley se los permite, en la forma y en los términos determinados en la misma —

para ello no aplica el aforismo jurídico *permissum videtur id omne quod non prohibetur*; por tanto, únicamente pueden ejercer las facultades y atribuciones previstas en la Ley que regula sus actos y consecuencias, es decir, la eficacia de la actuación de éstas se encuentra subordinada a que se ubiquen en el ámbito de facultades contenidas en el marco legal que rige su funcionamiento. Es por ello, que el principio de legalidad suele enunciarse bajo el lema de que, mientras los particulares pueden hacer todo aquello que no está prohibido, las autoridades sólo pueden hacer lo que la Ley les permite.

Esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación ha distinguido entre dos tipos de facultades de que goza toda autoridad en su actuar; las primeras, pueden estar expresamente señaladas en la Ley, o bien, encontrarse implícitamente contenidas en el marco regulatorio que la rige. Su característica es, sin duda, la libertad de apreciación que la Ley otorga a las autoridades para actuar o abstenerse de hacerlo en determinados casos, con el propósito de lograr la finalidad que la Ley les señala, por lo que el ejercicio de dichas facultades implica, en todos los casos, que la autoridad podrá elegir el tiempo y las circunstancias en que aplica la Ley, sin que ello suponga una autorización legislativa para la actuación arbitraria del órgano, pues sus acciones estarán acotadas por los lineamientos que las disposiciones jurídicas contemplen y, por encima de cualquier condición, por los requisitos Constitucionales de fundamentación y motivación de sus actos. Ilustra lo anterior la tesis P.LXII/98, cuyo rubro y texto es el siguiente:

"FACULTADES DISCRECIONALES. APRECIACIÓN DEL USO INDEBIDO DE LAS CONCEDIDAS A LA AUTORIDAD. La base toral de las facultades discrecionales es la libertad de apreciación que la ley otorga a las autoridades para actuar o abstenerse, con el propósito de lograr la finalidad que la propia ley les señala, por lo que su ejercicio implica, necesariamente, la posibilidad de optar, de elegir, entre dos o más decisiones, sin que ello signifique o permita la arbitrariedad, ya que esa actuación de la autoridad sigue sujeta a los requisitos de fundamentación y motivación exigidos por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual permite que los actos discrecionales sean controlados por la autoridad jurisdiccional.

Las segundas son aquellas cuya norma señala las consideraciones para su aplicación y que obligan a la autoridad a cumplir con lo que la Ley dispone – como la Ley Reglamentaria del Artículo 84 de la Constitución Política del Estado

de Veracruz de Ignacio de la Llave-, en otras palabras, son las que vinculan a la potestad que las ejerce a proceder de modo preciso en la forma prescrita, sin margen de apreciación subjetiva ni discrecional y por ello, es claro que su incumplimiento vulnera derechos fundamentales. En ese sentido se pronunció el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito al resolver por mayoría de votos, en sesión del diecinueve de abril de dos mil doce, el Amparo Directo ADA.197/2012.

La interpretación de esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que toda Autoridad en el ámbito de sus facultades y atribuciones sólo pueden hacer aquello que expresamente les faculta la Ley. Así, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que "las autoridades sólo pueden hacer aquello para lo que expresamente les facultan las leyes, en el entendido de que éstas, a su vez, constituyen la manifestación de la voluntad general"; dentro del Sistema Constitucional que nos rige, ninguna autoridad puede dictar disposición alguna que no encuentre apoyo en un precepto de la Ley, el requisito de fundamentación y motivación exigido por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implica una obligación para todas las autoridades –de cualquier categoría que éstas sean-, de actuar siempre con apego a las leyes y a la propia Constitución; por tanto, dentro de nuestro régimen Constitucional, las autoridades no tienen más facultades que las que expresamente les atribuye la Ley, y que los actos de las autoridades que no estén autorizados expresamente por Ley alguna, importan violación de garantías.

Este principio obliga a las Diputadas y Diputados de la LXVI Legislatura a someterse a las normas dictadas por el propio H. Congreso del Estado, ajustando sus actuaciones en todo momento a una Ley preexistente –como lo es la Ley Reglamentaria del Artículo 84 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave-. La Ley constituye el límite de toda su actuación legislativa. En virtud de este principio no se aceptan ya poderes personales; todo el poder es de la Ley, toda la autoridad que se puede ejercitar es la previamente expresada en la propia Ley; sólo "en nombre de la Ley" se puede exigir la obediencia.

CUARTO CONCEPTO DE INVALIDEZ. INCONSTITUCIONALIDAD POR VIOLACIONES AL DERECHO DE VOTAR Y SER VOTADO. En cuarto lugar, se violentan gravemente los derechos fundamentales de los Veracruzanos, y con ello, su derecho de votar y ser votados, y como consecuencia, su derecho de acceso al poder público previsto en los artículos 1o, 13, 30 inciso A), 34, 36 fracción IV, 55 fracciones I y III, 82 fracciones I y II, 116 fracción I párrafo quinto y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 2, 4 párrafos décimo y décimo primero, 11, 43 fracciones I y II y 80, de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Lo anterior, de conformidad a lo establecido en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que señala que:

"Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados."

De la interpretación del artículo antes citado de la Constitución General de la República, se desprende la existencia de la Supremacía Constitucional, la cual: Es un principio del "derecho Constitucional" que ubica a la Constitución de nuestro país, jerárquicamente por encima de todas las demás normas jurídicas, internas y externas, que puedan llegar a regir sobre el territorio mexicano, y a su vez la vincula con la teoría del poder constituyente, la supremacía de la Constitución supone una gradación jerárquica en el Orden Jurídico derivado y se escalona en planos distintos, así pues que ella representaría el punto más alto de la escala jerárquica normativa. Esto incluiría a los Tratados Internacionales ratificados por nuestro país y cuyo ámbito de aplicación pueda ser también sobre las relaciones jurídicas internas, de manera que cualquier norma posterior y contraria que en cualquier momento colide con la Norma Suprema provocaría la nulidad de la norma inferior.

La supremacía de la Constitución tiene dos sentidos. En un sentido fáctico, propio de la Constitución material, significa que dicha Constitución o derecho Constitucional material es el fundamento y la base de todo el orden jurídico-político de un Estado; Pero el sentido con que el constitucionalismo utiliza la noción de Supremacía Constitucional es otro: apunta a la noción de que la Constitución formal, revestida de super legalidad, obliga a que las normas y los actos estatales y privados se ajusten a ella. Ello envuelve una formulación de deber-ser; todo el orden jurídico-político del Estado debe ser congruente o compatible con la Constitución formal.

De acuerdo con las consideraciones efectuadas por los Ministros de ese máximo Tribunal Jurisdiccional del país, en la tesis de jurisprudencia número P./J.219/99, la Acciones de Inconstitucionalidad no son otra cosa que el análisis abstracto de cualquier Resolución que Órganos Legislativos minoritarios, Partidos Políticos y el Procurador General de la República, solicitan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre la base de que dicha Resolución tenga una posible contradicción entre una norma de carácter general o un tratado internacional y la Constitución Política o una violación a ésta última Ley Suprema de nuestro país.

Las Acciones de Inconstitucionalidad propenden a reforzar el respeto que el legislador debe rendirle a la Carta Magna, mediante una Sentencia estimatoria que declare la invalidez general de los actos contrarios a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo cual se impone la obligación al legislador local de observar el principio de la Supremacía Constitucional antes de expedir cualquier Resolución.

De conformidad a lo establecido por los artículos 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 38 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 47 segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; y 75 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado. Toda Resolución que emitan los Congresos Federal y locales, tendrán el carácter de Ley o Decreto.

En ese sentido, consideramos que el Pleno de la LXVI Legislatura del H. Congreso del Estado de Veracruz, al aprobar el "DECRETO 240 POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 11 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE", trasgrede el marco normativo Constitucional, ya que como es de observarse en sus artículos 13, 14, 16, 34, 82 fracciones I y III y 116 fracción I párrafo quinto; deja claro que el espíritu de nuestra Carta Magna es el de proveer a los ciudadanos del principio de la Garantía de la Seguridad Jurídica, en el que ninguna persona puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales o privada de su libertad, propiedad, posesión o derecho, sino mediante un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho; ya que no solamente trasgrede dicho principio Constitucional, sino que se extralimitó, ya que con fundamento en lo establecido en los artículos 34, 82 fracciones I y II, y 116 fracción I párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; mismos que concatenados con los diversos 11 y 43 fracciones I y II, de la Constitución Política para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, le da la categoría de "veracruzanos" a todas las personas nacidas fuera del territorio del Estado, siempre y cuando tenga "hijos veracruzanos" -aunque ellos no tengan residencia en Veracruz-, o con una residencia efectiva de cinco años en territorio veracruzano, tal y como se puede apreciar en el "DECRETO 240 POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 11 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE", cuyo texto señala:

"Artículo 11. [...]

I. a II. [...]

III. Las o los mexicanos nacidos fuera del territorio del estado, con hijos veracruzanos o con una residencia efectiva de cinco años en territorio veracruzano."

Así cualquier persona nacida en Puebla, Quintana Roo, Baja California o cualquier otra entidad de país o inclusive del extranjero, y que, por el simple hecho de haber tenido un hijo que nació en el territorio de Veracruz, se convertirá en "veracruzano", aunque no viva o nunca haya vivido en el Estado de Veracruz.

Cabe hacer notar a esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 30 señala que:

"Artículo 30. La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización.

A) Son mexicanos por nacimiento:

I. Los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres.

II. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos, de madre mexicana o de padre mexicano;

III. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización, de padre mexicano por naturalización, o de madre mexicana por naturalización, y

IV. Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes.

B) Son mexicanos por naturalización:

I. Los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones carta de naturalización.

II. La mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o con mujer mexicanos, que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y cumplan con los demás requisitos que al efecto señale la ley."

Artículo Constitucional que prevé como mexicanos por nacimiento a los que nazcan en el territorio o a los hijos de padre, madre o padres mexicanos [por nacimiento o por naturalización]; cabe señalar que en la contradicción de tesis 212/2019 sobre "LA NACIONALIDAD MEXICANA POR NACIMIENTO SÓLO PUEDE OTORGARSE A QUIENES SE UBICAN EN LOS SUPUESTOS CONTEMPLADOS DE MANERA EXPRESA EN EL TEXTO CONSTITUCIONAL", destaca que el Constituyente estableció una protección a los mexicanos que han salido del país y que tuvieron hijos fuera de éste, pero que mantienen lazos con nuestra Nación, mediante la cultura, tradiciones y costumbres. Se dijo que, de lo anterior, parte el otorgamiento de la nacionalidad mexicana por nacimiento a quien, habiendo nacido fuera del país, es hijo de padres mexicanos nacidos en el territorio nacional. Asimismo, se indicó que del proceso legislativo se advierte la intención del Constituyente, en el sentido de que el ius sanguinis no tiene como finalidad crear nuevos supuestos de nacionalidad mexicana.

Asimismo señala que en cuanto al texto del artículo 30 inciso A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se precisó que en el mismo se prevé que la nacionalidad de los padres mexicanos, sea por nacimiento [fracción II] o por naturalización [fracción III], es transferible a sus hijos nacidos fuera del territorio nacional –no a la inversa “ de hijos a padres”, como lo propone el Decreto 240 que se impugna-, es decir, se privilegia el derecho de sangre del hijo, sin importar su lugar de nacimiento, a adquirir la nacionalidad mexicana del padre o madre que nació en territorio nacional o del padre o madre que es mexicano en razón de un acto jurídico voluntario, como la naturalización.

Cabe señalar que en el mismo tenor y siguiendo lo establecido en nuestra Carta Magna, los treinta y dos textos Constitucionales de todas las entidades de la federación, prevén como nativos de sus Estados, a los nacidos en su territorio o a los hijos de padre, madre o padres originarios de dicha entidad federativa, tal y como lo establecía la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, mismo que señalaba:

“Artículo 11. Son veracruzanos:

I. Los nacidos en el territorio del Estado; y

II. Los hijos de padre o madre nativos del Estado, nacidos en el territorio nacional o en el extranjero.”

Sin embargo, el “DECRETO 240 POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 11 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE”, aprobado por la LXVI Legislatura del H. Congreso del Estado, publicado en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz, bajo el Número Extraordinario 318, Tomo CCV, de fecha once de agosto de dos mil veintidós, introduce al marco Constitucional local de Veracruz un supuesto normativo que contraviene al numeral 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, permitiendo que se dé la veracruzaneidad a la inversa, sería como permitir que un extranjero por el simple hecho de haber tenido una hija o hijo mexicano automáticamente adquiriera la nacionalidad “mexicana”; es por ello que señalamos que el Decreto 240, violenta lo normado en artículo 133 de la Constitución General de la República; por lo que el Congreso local extralimita sus atribuciones, violentando el principio de

Seguridad Jurídica y Supremacía Constitucional al que hemos hecho referencia en párrafos anteriores.

Siguiendo con lo señalado en la contradicción de tesis 212/2019 sobre “LA NACIONALIDAD MEXICANA POR NACIMIENTO SÓLO PUEDE OTORGARSE A QUIENES SE UBICAN EN LOS SUPUESTOS CONTEMPLADOS DE MANERA EXPRESA EN EL TEXTO CONSTITUCIONAL”, se hizo notar que, de interpretarse la fracción II del inciso A, del artículo 30 de la Constitución General de la República de manera “extensiva” para el supuesto no previsto intencionalmente por el Constituyente, consistente en que sean mexicanos por nacimiento las personas nacidas en el extranjero, hijas de padres mexicanos que tampoco nacieron en territorio nacional pero que son mexicanos por nacimiento en razón de que sus padres lo son al haber nacido en el país, se estaría modificando la conformación del Estado mexicano, en cuanto a la nacionalidad –mismo principio lo es hacer que un extranjero adquiriera la nacionalidad por el único hecho de haber tenido un hijo nacido en el territorio nacional-.

Adicionalmente, la Sala señaló, entre otros aspectos, que la nacionalidad determina el reconocimiento de derechos fundamentales, sociales y políticos; que el artículo 31 Constitucional establece las obligaciones de los mexicanos, sin distinción alguna del carácter de mexicano por nacimiento o por naturalización; que el artículo 30 de la Constitución General prevé diversas vías para la adquisición de la nacionalidad mexicana; que en torno a la nacionalidad mexicana, fue intención del Constituyente no sólo priorizar el arraigo a la cultura mexicana, sino al suelo mexicano y a que se reconozcan como mexicanos a quienes de hecho habitan en el territorio nacional; que el Constituyente consideró que se presume que el arraigo e identidad mexicana se dan cuando las personas nacen o habitan en el territorio nacional o cuando se transmiten mediante lazos muy estrechos con nacionales, como son la filiación en primer grado y el matrimonio; y que el Constituyente no fijó dicha presunción en favor de las personas nacidas fuera del país, cuyos padres son mexicanos por nacimiento pero también nacieron en el extranjero, pues su vinculación al Estado pareciera ser más lejana, al asumir que sus propios padres han perdido la fuerte vinculación con México.

En ese orden de ideas, la Sala sostuvo que el texto Constitucional es claro respecto a que el otorgamiento de la nacionalidad mexicana por nacimiento no es extensivo a otros supuestos no previstos expresamente por el Constituyente, es decir, las hipótesis establecidas en el artículo 30, inciso A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos deben interpretarse de manera estricta, pues se destinan sólo a los sujetos que están explícitamente contemplados en la norma, supuestos que son limitativos y no enunciativos, por lo que no puede interpretarse de otra manera; criterio que se dejó establecido en la tesis jurisprudencia cuyo rubro y texto es el siguiente:

"NACIONALIDAD MEXICANA POR NACIMIENTO. EL ARTÍCULO 30, INCISO A, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS NO ES EXTENSIVO A SUPUESTOS NO PREVISTOS EXPRESAMENTE. La hipótesis contenida en el artículo 30, inciso A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos debe interpretarse de manera estricta, es decir, que abarca únicamente el supuesto relativo a que son mexicanos por nacimiento los que nazcan en el extranjero, hijos de padre o madre mexicanos que hayan nacido en territorio nacional (primera generación). Así, dicha porción normativa se refiere sólo a los sujetos que están explícitamente contemplados en ella, sin que pueda extenderse a otras hipótesis no previstas, ya que los supuestos son limitativos y no enunciativos. Esta interpretación estricta se corrobora del propio texto del artículo constitucional, así como de la intención expresada por el constituyente y la interpretación sistemática de la Constitución en relación con la legislación ordinaria relativa a la nacionalidad.

Más si fuera poco –como ya lo señalamos en el Primer Concepto de Invalidez–, con la adición al artículo 11 de la Constitución local de Veracruz, el Grupo Mayoritario en el Congreso local busca quitarle los obstáculos a la persona que impulsarán a la Gubernatura del Estado, quien es originaria [por nacimiento] del Estado de Zacatecas], quien nunca ha vivido en el Estado de Veracruz, pero que por circunstancias personales tuvo un hijo nacido en Veracruz; así con el "DECRETO 240 POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 11 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE", estará cubriendo el requisito señalado tanto en el artículo 116 fracción I párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala:

*"Artículo 116. [...]
[...]"*

I. [...]

[...]

[...]

[...]

Sólo podrá ser gobernador constitucional de un Estado un ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de él, o con residencia efectiva no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día de los comicios, y tener 30 años cumplidos el día de la elección, o menos, si así lo establece la Constitución Política de la Entidad Federativa.

II. a IX. [...]"

Así como el requisito de elegibilidad que establece el artículo 43 párrafo primero fracción I, de la Constitución Política para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que señala:

"Artículo 43. Para ser Gobernador del Estado se requiere:

I. Ser veracruzano en pleno ejercicio de sus derechos;

II. a VII. [...]

[...]"

Con ello, poder registrar a la Candidata a la Gubernatura del Estado que exprofeso se hizo la Iniciativa que da como origen el "DECRETO 240 POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 11 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE", impulsada por el Grupo Legislativo de Morena; violentando con ello, el derecho de votar y ser votado en su vertiente el derecho al "acceso al cargo público", de los ciudadanos que siendo legítimamente "veracruzanos" busquen competir a la Gubernatura del Estado.

Es indispensable señalar que la garantía de Seguridad Jurídica, se refiere a determinados procedimientos a los que debe apegarse el Poder Público, cuando con sus actos pretenda afectar a los gobernados, así el principio de protección del individuo frente al Estado es la declaración Constitucional del Principio de Legalidad, el cual tiene su justificación en la hipótesis de que una autoridad no puede realizar determinado acto concreto, dictar determinada resolución, sino fundándose en una Ley anterior. El Principio de Legalidad es esencial en todo régimen del Estado Constitucional, para que haya Estado de Derecho; de no aplicar tal principio no existiría fundamento de la organización jurídica, de la acción de los gobernantes: existiría un régimen arbitrario, absolutista y despótico, pues pudieran al actuar y ejercer actos de árbitro en una competencia

distinta a la que por disposición expresa tiene conferida, por lo que se omite y se incumple las formalidades esenciales de un procedimiento, siendo indudable que violaría las garantías de audiencia y legalidad consagradas por el artículo 14 Constitucional.

En resumen, la aprobación del "DECRETO 240 POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 11 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE", es una imposición dada por parte del Grupo Legislativo de "Morena" del H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,

Además ¿Qué Poder Legislativo puede llamarse representante legítimo de los veracruzanos cuando haciendo uso de mayorías mecánicas le impone al pueblo Resoluciones, Leyes y Autoridades contrarias a su voluntad? Ninguno que se precie realmente de demócrata.

No debemos olvidar la frase de John Emerich Edward Dalberg-Acton de Aldenham, primer Barón de Acton, al oponerse a la concentración del poder y mal uso por parte del estado, y defender la soberanía del individuo por encima de todo: "El poder corrompe y el poder absoluto corrompe de forma absoluta".

No obsta agregar, que el hecho de que los votantes de tal Decreto 240, hayan sido –por "mayoriteo"–, los Diputados de Morena, dicho Órgano Legislativo local, ante el incumplimiento de lo establecido por los artículos 30, 34, 82 fracciones I y II, y 116 fracción I párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; además que tal "aprobación", al no haberse apegado a su propia normatividad interior, por sí mismo invalida tal acto combatido, violando la propia reglamentación que "rige" la vida del H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, casa del Poder Legislativo y de todos los veracruzanos, señales contundentes de la falta de respeto, no solo a su propio Reglamento Interior, sino a la Constitución Política del Estado y la General de la República.

Tenemos entonces que ante un procedimiento legislativo rápido y en el que se aplicaron de forma errónea y facciosa las reglas del procedimiento,

donde no hubo un debate significativo sobre la iniciativa, existe una violación amplia y evidente de las formalidades esenciales del quehacer legislativo, las cuales se entienden de una interpretación conjunta del artículo 14 y el 72 Constitucional y que ha tenido amplio desarrollo por parte de esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por lo anteriormente expuesto y fundado debe ser declarado de Inconstitucional el "DECRETO 240 POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 11 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE", al ser violatorio en los términos planteados en el presente controvertido pues, consideramos que se encuentra viciado el procedimiento de tal acto emanado del Poder Legislativo local.

Por lo antes expuesto y fundado en el presente concepto de invalidez, solicitamos a esa Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, declare la invalidez de la porción normativa impugnada.

PETICIÓN DE INTERPRETACIÓN CONFORME.

Ahora bien, en caso de que ese Alto Tribunal estime que esta causa de pedir es Insuficiente para invalidar las normas que se combaten, solicitamos se tenga a bien realizar una interpretación conforme de las disposiciones que aquí se cuestionan, a efecto de que las normas se interpreten en el sentido de que las limitaciones y prohibiciones, no signifiquen menoscabo alguno a la libertad, pluralidad y democracia.

PETICIÓN DE EFECTOS DE INVALIDEZ

Si bien el acto reclamado consiste en una adición de una fracción III al artículo 11 de la Constitución local, consistente en elevar a la categoría de "veracruzanos" a las personas nacidas fuera del territorio de Veracruz pero que hayan tenido hijos "veracruzanos", consideramos necesario pedir que se suspendan sus efectos, pues existe la posibilidad de que al mantener dicha adición en el marco Constitucional, abrirá las posibilidades de tener candidatos a

la Gubernatura del Estado que no tenga el arraigo y el cariño con la entidad veracruzana, y que violentará los derechos político-electorales de los ciudadanos que si siendo veracruzanos de origen, se verán desplazados de la posibilidad de competir a la máxima representación en el Estado que los vio nacer. Es por ello que pedimos que esa H. Suprema Corte de Justicia que:

a) Se suspendan los efectos del Decreto 240 para que de tal suerte, el Partido Político Morena no registre como candidata "veracruzana" a la Gubernatura del Estado a una persona cuyo estado de origen es Zacatecas.

b) Se inaplique la fracción III del artículo 11 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; interpretado en conjunto con el 59 y el 64 último párrafo, ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo antes expuesto se hace debido a lo siguiente:

Bien se sabe que la Acción de Inconstitucionalidad es un medio de control Constitucional abstracto que tiene por objeto el control de una norma. Es decir, no se necesita aportar pruebas de un daño realizado o inminente, ni se debe dar sobre competencias –como las Controversias Constitucionales-, o sobre derechos humanos –como en el Juicio Amparo-, para poderla ejercer. No hay entonces un sujeto, interés o daño y por lo tanto, no existe la necesidad de preservar la materia litigiosa.

El diseño de este mecanismo se ve reflejado en la teleología del último párrafo del artículo 64 de la Ley Reglamentaria en cita, a saber:

"ARTICULO 64. Iniciado el procedimiento, conforme al artículo 24, si el escrito en que se ejercita la acción fuere obscuro o irregular, el ministro instructor prevendrá al demandante o a sus representantes comunes para que hagan las aclaraciones que correspondan dentro del plazo de cinco días. Una vez transcurrido este plazo, dicho ministro dará vista a los órganos legislativos que hubieren emitido la norma y el órgano ejecutivo que la hubiere promulgado, para que dentro del plazo de quince días rindan un informe que contenga las razones y fundamentos tendientes a sostener la validez de la norma general impugnada o la improcedencia de la acción de inconstitucionalidad. Tratándose del Congreso de la Unión, cada una de las Cámaras rendirá por separado el informe previsto en este artículo.

En los procedimientos por acciones en contra de leyes electorales, los plazos a que se refiere el párrafo anterior serán, respectivamente, de tres días para hacer aclaraciones y de seis días para rendir el informe que contenga las razones y fundamentos tendientes a sostener la constitucionalidad de la ley impugnada.

La admisión de una acción de inconstitucionalidad no dará lugar a la suspensión de la norma cuestionada."

Por otra parte, resultan aplicables las disposiciones —de forma supletoria—, del Título Segundo de esta Ley reglamentaria, a todo lo relacionado con las Acciones de Inconstitucionalidad, tal y como lo señala en su artículo 59. Esto significa que no solo no resulta procedente la suspensión de oficio al admitir una Acción de Inconstitucionalidad, sino que tampoco se puede pedir hacia una norma general. Así lo señala el artículo 14 de la Ley reglamentaria en comento:

"ARTICULO 14. Tratándose de las controversias constitucionales, el ministro instructor, de oficio o a petición de parte, podrá conceder la suspensión del acto que las motivare, hasta antes de que se dicte la sentencia definitiva. La suspensión se concederá con base en los elementos que sean proporcionados por las partes o recabados por el ministro instructor en términos del artículo 35, en aquello que resulte aplicable.

La suspensión no podrá otorgarse en aquellos casos en que la controversia se hubiere planteado respecto de normas generales."

No obstante, lo anterior, el diseño de este mecanismo obedece a un contexto radicalmente diferente al que nos encontramos: En mil novecientos noventa y cuatro y mil novecientos noventa y cinco existía un régimen de derechos de corte Estado céntrico, donde era este ente el que los otorgaba a sus súbditos, y no eran estos inherentes a las personas; era la era de las "garantías individuales". Con el advenimiento de la reforma Constitucional de dos mil once, los "derechos humanos" dimanaban de la persona y son reconocidos por el Estado, que debe otorgar la protección más amplia y debe también hacerlo de forma progresiva y ante todo, resultan vinculantes ante toda autoridad dentro de su ámbito competencial, tal y como se puede observar:

"Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así

como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas."

Esto no solamente significa una mayor amplitud de derechos, sino que en sí conlleva una refundación del Estado Mexicano: Las autoridades tienen mayor rango de acción siempre y cuando actúen en defensa de los derechos humanos, las fuentes del Derecho Constitucional mexicano cambiaron con el parámetro de regularidad Constitucional y sobre todo, existe un interés subyacente sobre todos los instrumentos de control Constitucional: los derechos humanos y la dignidad.

El artículo 15 de la Ley Reglamentaria en análisis, establece una serie de límites a las Suspensiones en cuanto a la trascendencia de sus efectos:

"ARTICULO 15. La suspensión no podrá concederse en los casos en que se pongan en peligro la seguridad o economía nacionales, las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano o pueda afectarse gravemente a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que con ella pudiera obtener el solicitante."

Esto se hace no para evitar un otorgamiento frívolo, sino para evitar el uso indebido de las suspensiones. Ahora bien, si lo interpretamos a contrario sensu, podemos ver que dicho artículo también establece las razones por las cuales se debe de conceder: a) para proteger la seguridad y la economía nacional; b) resguardar las instituciones fundamentales, y c) salvaguardar a la sociedad frente a intereses particulares.

En el caso que nos ocupa, la reforma Constitucional en materia de derechos humanos de dos mil once reconstituye el interés social o colectivo del artículo 15 de la Ley Reglamentaria en materia de derechos humanos, toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como autoridad constituida tiene la obligación de “promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos” en el ámbito de su competencia.

Esto se traduce en el hecho de que el otorgamiento de la suspensión debe darse de forma amplísima cuando existen derechos humanos involucrados y que pueden ser lesionados de forma irreparable, aun tratándose de un control abstracto de una norma general. Sin embargo, también significa que cuando existen en juegos derechos humanos, la Acción de Inconstitucionalidad se vuelve un medio concreto de control Constitucional, donde las partes son: a) la autoridad responsable, b) una colectividad afectada como parte agraviada, y c) el juzgador Constitucional, entendido éste como el Pleno de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Así como la reforma Constitucional en materia de derechos humanos de dos mil once redimensionó la forma en cómo el Estado Mexicano entiende los derechos humanos, la reforma más reciente al artículo 29 párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableció también que los derechos políticos no son susceptibles de menoscabo durante un estado de excepción. Es decir, los derechos políticos tienen una prevalencia sobre de otros, toda vez que son parte de un núcleo duro que merece especial protección. A saber:

“Artículo 29. [...]

En los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la

personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. -

[...]

[...]

[...]"

Esto se traduce, por un lado, a que los derechos políticos son aquellos, sobre los cuales el otorgamiento de la suspensión debe proceder de forma más generosa y aquellos que se ven especialmente vulnerados, de no darse este supuesto.

Cuando se modifica por medio de una reforma Constitucional la calidad de ser "veracruzano" para favorecer a una sola persona, existe una violación al derecho de ser votado, de todos y cada uno de las personas que competirán a la Gubernatura del Estado y que si son "veracruzanos" por nacimiento y por lo tanto, es una colectividad que tienen en juego un derecho altamente vulnerable, que debe ser protegido por esa H. Suprema Corte de una forma especial y amplia.

Todo el desarrollo realizado implica que al tratarse de derechos humanos sujetos a menoscabo o violación por los efectos de una norma general –sobre todo, si se trata de derechos establecidos en el núcleo duro del artículo 29 Constitucional-, la Acción de Inconstitucionalidad se vuelve un medio concreto de control Constitucional que no resulta equiparable ni al Juicio de Amparo, ni a la Controversia Constitucional, y en el cual se permite el otorgamiento de la suspensión sobre los efectos de una norma general, cosa que conlleva implícitamente la inaplicación de los artículos 14 y 64, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El ejemplo más claro de lo anterior lo encontramos en la Resolución del Incidente de Suspensión de las Acciones de Inconstitucionalidad con los números de expedientes con clave de identificación 105/2018 y 108/2018, de

fecha siete de diciembre de dos mil dieciocho. En estos, el Ministro Instructor resolvió inaplicar el artículo 64 de la Ley Reglamentaria en cita, bajo el siguiente razonamiento:

"[...] Por otra parte, el último párrafo del artículo 64 de la Ley de la materia, establece que la admisión de una acción de inconstitucionalidad no dará lugar a la suspensión de la norma cuestionada. Sin embargo, la observancia a esa disposición no debe ser irrestricta o indiscriminada, particularmente en casos como el que ahora se analiza, donde resulta posible que de aplicarse el ordenamiento combatido, se podrían vulnerar de manera irreparable, derechos fundamentales.

En efecto, el artículo 1 de la Constitución Federal en sus párrafos segundo y tercero establecen respectivamente, que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esa Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia; y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Por tanto, se estima que la interpretación constitucionalmente válida que debe darse al último párrafo del artículo 64 de la Ley de la materia, lleva a sostener, como excepción, que en aquellos casos en que la controversia se hubiere planteado respecto de normas generales que impliquen o puedan implicar la transgresión irreversible de algún derecho humano, sí es factible conceder la suspensión, más en casos en que de obligarse a cumplir el mandato de ley, el daño se vuelve irreparable o el propio juicio quede sin materia por ser, precisamente, ese el de manera tal que, de continuarse con su aplicación a decidir en el fondo, ningún sentido tendría ya obtener un fallo favorable, pues la violación alegada se habría consumado.

En otras palabras, con fundamento en el ya referido artículo 1 de la Constitución Federal, es factible cuando se controviertan normas generales que impliquen o que pueda implicar la transgresión de derechos fundamentales, conceder la suspensión solicitada, porque de acuerdo con los criterios de este Alto Tribunal, la medida no sólo es cautelar, sino también tutelar para prevenir el daño trascendente que se pueda ocasionar no sólo a las partes, sino a la sociedad en general."

Esta exposición argumentativa viene a corroborar lo antes aducido ante sus Señorías, pero también viene a establecer un criterio de gran importancia para el otorgamiento de la suspensión: "una transgresión irreversible". Esto viene a continuar la tendencia establecida en la jurisprudencia P./J.27/2008, que al efecto establece:

"SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIDAD CONSTITUCIONAL. NATURALEZA Y FINES. La suspensión en controversias constitucionales, aunque con características muy particulares, participa de la naturaleza de las medidas cautelares, por lo que en primer lugar tiene como fin preservar la materia del juicio, asegurando provisionalmente el bien jurídico de que se trate para que la sentencia que, en su caso, declare el derecho de la parte actora, pueda ejecutarse eficaz e íntegramente y, en segundo, tiende a prevenir el daño trascendente que pudiera ocasionarse a las partes y a la sociedad en general en tanto se resuelve el juicio principal, vinculando a las autoridades contra las que se concede a cumplirla, en aras de proteger el bien jurídico de que se trate y sujetándolas a un régimen de responsabilidades cuando no la acaten. Cabe destacar que por lo que respecta a este régimen, la controversia constitucional se instituyó como un medio de defensa entre poderes y órganos de poder, que tiene entre otros fines el bienestar de la persona que se encuentra bajo el imperio de aquéllos, lo que da un carácter particular al régimen de responsabilidades de quienes incumplen con la suspensión decretada, pues no es el interés individual el que se protege con dicha medida cautelar, sino el de la sociedad, como se reconoce en el artículo 15 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por último, es importante hacer notar que la inaplicación realizada por el Ministro C. Doctor ALBERTO GELACIO PÉREZ DAYAN, al artículo 64 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es la única ocasión en que esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación ha ejercido control sobre de dicha normativa procesal, toda vez que en el Recurso de Reclamación con el número de expediente con clave de identificación 32/2016, en la Controversia Constitucional con clave de identificación 62/2016, se dijo:

"[...] Sin embargo, la observancia de tal disposición no debe ser irrestricta o indiscriminada, pues en casos como el que ahora se analiza, donde resulta latente que de aplicarse la norma secundaria, se podría vulnerar el derecho humano de protección de los datos personales al exigir a los sujetos obligados que publiquen en los sistemas habilitados para ello las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales, sin otorgarles la oportunidad de decidir si ese es su deseo, conforme lo dispone la Constitución Federal.

Por tanto, se estima que la interpretación más favorable que debe darse al último párrafo del artículo 14 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al texto de la propia norma fundamental, lleva a sostener como excepción que en aquellos casos en que la controversia se hubiere planteado respecto de normas generales que impliquen o puedan

*implicar la transgresión de algún derecho humano, sí es factible conceder la suspensión, más en casos en que de obligarse a cumplir el mandato de ley, el propio juicio quede sin materia por ser, precisamente, ese el tema a decidir en el fondo, de manera tal que, de divulgarse la información, ningún sentido tendría ya obtener un fallo favorable pues la violación alegada se habría consumado.
[...]"*

De esto concluimos que el "DECRETO 240 POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 11 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE", aprobado por la LXVI Legislatura del H. Congreso del Estado, promulgado por el Gobernador del Estado y publicado por el Director de la Gaceta Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz, bajo el Número Extraordinario 318, Tomo CCV, de fecha once de agosto de dos mil veintidós, contraviene los artículos 1o, 13, 16 párrafo primero, 30 inciso A), 35 fracción II, 36 fracción IV, 39, 40, 41 párrafo tercero fracción I, 82 fracciones I y III, 116 fracción I párrafo quinto y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Para proveer de convicción a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, acompañamos a la presente ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD, el material probatorio que consideramos resulta idóneo para acreditar las manifestaciones vertidas en el cuerpo del presente memorial. Pruebas que relacionamos con todas y cada una de las consideraciones planteadas en este ocurso:

PRUEBAS

1. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la certificación expedida por el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, C. Licenciado EDMUNDO JACOBO MOLINA, en la que se hace constar, que el Partido de la Revolución Democrática, cuenta con registro vigente como Partido Político Nacional, por lo que se encuentra en pleno goce de los derechos y sujeto a las obligaciones que las leyes señalan, misma que relaciono con todos y cada uno de los hechos y puntos de derecho de la presente Acción de Inconstitucionalidad. Solicitando me sea bien recibida.

2. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la certificación expedida por el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, C. Licenciado EDMUNDO JACOBO MOLINA, en la que se hace constar que el suscrito, me encuentro registrado como Presidente de la Dirección Nacional Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática, misma que relacionamos con todos y cada uno de los hechos y puntos de derecho de la presente Acción de Inconstitucionalidad. Solicitando me sea bien recibida.
3. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la certificación de los Estatutos del Partido de la Revolución Democrática, Partido Político Nacional, que deberá expedir el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, Licenciado EDMUNDO JACOBO MOLINA, al haberla solicitado mediante el oficio; normatividad partidista, en la que se hace constar que los suscritos, contamos con las facultades de representación de la Dirección Nacional Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática, misma que se pide se solicite su remisión y que relacionamos con todos y cada uno de los hechos y puntos de derecho de la presente Acción de Inconstitucionalidad. Solicitando nos sea bien recibida.
4. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la copia simple de la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, bajo el Número Extraordinario 318, Tomo CCV, de fecha jueves once de agosto de dos mil veintidós, donde se publica el Decreto 240 por el que se adiciona la fracción III al artículo 11 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Solicitando nos sea bien recibida.
5. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. En todo lo que favorezca a los intereses de nuestra representada, y que se relacionan con todos y cada uno de los hechos y puntos de derecho de la presente Acción de Inconstitucionalidad. Solicitando nos sea bien recibida.

Por lo expuesto y fundado a ustedes CC. Ministras y Ministros de esa Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, con las demostraciones de nuestro respeto muy atentamente solicito se sirvan:

PRIMERO. Tener por reconocida la personalidad y el carácter de quienes suscribimos la presente acción y por establecido el domicilio señalado para recibir notificaciones y documentos, así como autorizados a los delegados que se mencionan.

SEGUNDO. Admitir la presente Acción de Inconstitucionalidad, promovida en contra de la expedición, promulgación y publicación del "DECRETO 240 POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 11 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE".

TERCERO. Admitir en sus términos las pruebas que se mencionan.

CUARTO. Dar vista al Órgano Legislativo que emitió la norma, así como al Órgano Ejecutivo que la promulgó, a efecto de que rindan los correspondientes informes.

QUINTO. Poner los autos a disposición de la Ministra o Ministro Instructor para la substanciación de la presente Acción de Inconstitucionalidad

SEXTO. Poner los autos a la vista de las partes por el término legal para que formulen alegatos.

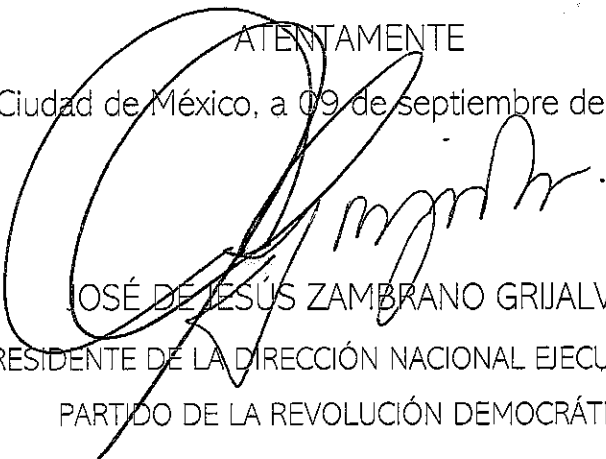
SEPTIMO. Dictar resolución, declarando la invalidez de las normas impugnadas, ante la falta de conformidad de estas, con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

OCTAVO. Acogiéndonos a la Suplencia de la queja, por deficiencias en su caso, de la presente acción de inconstitucionalidad, respetuosamente hacemos saber que este alto Tribunal, ha considerado que basta la concurrencia de los elementos de la definición para la procedencia de una acción, Sirve de apoyo las siguientes tesis de jurisprudencias de rubros: "ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LÍMITES DE LA

SUPLENCIA DE LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ" y "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SU PROCEDENCIA EN OTRAS MATERIAS, AUN A FALTA DE CONCEPTO DE VIOLACIÓN O AGRAVIO, CUANDO SE ADVIERTA VIOLACIÓN GRAVE Y MANIFIESTA DE LA LEY".

ATENTAMENTE

Ciudad de México, a 09 de septiembre de 2022.


JOSÉ DE JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA
PRESIDENTE DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

015262

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION

2022 SEP 12 AM 8 57

OFICINA DE CERTIFICACION
JUDICIAL Y CORRESPONDENCIA

Recibido por el buzón judicial el 10 de
Septiembre del presente año en 57 folios
con una certificación de registro en 1
foja





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CONTENIDO DEL DOCUMENTO

NOMBRE DEL PROMOVENTE: José de
Jesús Zambrano Grillo

NÚMERO DE COPIAS: 57

NÚMERO DE ANEXOS: 1

FOLIO: 30661

3762fca342bf11fb0d3f8d64dfbe667e19c92e8a15a6b08b668e2fb27ac1f03

3762fca342bf11fb0d3f8d64dfbe667e19c92e8a15a6b08b668e2fb27ac1f03

3762fca342bf11fb0d3f8d64dfbe667e19c92e8a15a6b08b668e2fb27ac1f03

3762fca342bf11fb0d3f8d64dfbe667e19c92e8a15a6b08b668e2fb27ac1f03